**CONTESTACION DE ESCRITO
DE SOLICITUDES, ARGUMENTOS Y
PRUEBAS DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS.**

CASO.12.354

**HONORABLES JUECES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS:**

EL ESTADO DE PANAMA por este medio, acude ante la Honorable **CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**, a efecto de dar respuesta al Escrito de Solicitudes, Argumentos y Pruebas, presentados por los representantes del Congreso General Kuna de Madugandi y Congreso General de Alto Bayano, por supuestas violaciones de los Derechos Humanos, de las comunidades **KUNA-MADUGANDI Y EMBERÁ DE BAYANO**.

PRETENSIONES DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS:

Los representantes de las presuntas Víctimas, solicitan se condene al **ESTADO DE PANAMÁ**, por violaciones de los Derechos Humanos de los pueblos **INDÍGENAS KUNA DE MADUGANDI y EMBERA DE ALTO BAYANO**, de conformidad a las siguientes razones:

- 1- Violación continua al derecho de propiedad colectiva de los Pueblos

Indígenas Kuna de Madugandi y Emberá de Alto Bayano de Panamá y sus miembros debido al incumplimiento del Estado de Panamá del Pago de Indemnizaciones Económicas derivadas del Desalojo e inundaciones de los territorios ancestrales de las presuntas víctimas.

- 2- La falta de reconocimiento, titulación y demarcación de las tierras de la Comarca Kuna de Madugandi, por un período de tiempo **comprendido dentro de la competencia temporal de la Corte.**
- 3- La falta de reconocimiento de la titulación, demarcación y titulación de las tierras otorgadas a los Emberá de Alto Bayano.
- 4- El incumplimiento de prevención frente a la invasión de colonos y la tala ilegal de madera, como corolario de su protección efectiva del territorio y los recursos naturales de las presuntas víctimas.
- 5- El incumplimiento de la obligación de otorgar un procedimiento adecuado y efectivo para el acceso a la propiedad territorial, así como para tener el acceso a la propiedad territorial, como también para obtener una respuesta frente a las múltiples denuncias de injerencias por parte de terceros a sus territorios y recursos naturales.
- 6- La presencia de discriminación y la falta de igualdad ante la ley. Sobre todo por la vigencia de normas internas de carácter asimilacionista que genera violación a la propiedad colectiva de tierras ancestrales y los recursos naturales de los Pueblos Indígenas de Panamá .

Las presuntas víctimas de igual manera en su Escrito de Solicitudes, piden a la **CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS** se declare que:

- 1- **“El Estado de Panamá violó el artículo 21 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los PUEBLOS INDÍGENAS KUNA DE MADUGANDI Y EMBERA del Bayano y sus miembros, al haberse abstenido de otorgar una justa y pronta indemnización, luego de más de cuatro décadas de enajenados sus territorios ancestrales.”**
- 2- **El Estado de Panamá violó el derecho a la propiedad consagrado en el Artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del pueblo Emberá del Bayano y sus miembros, por no haberles provisto acceso efectivo a un título de propiedad colectiva sobre sus territorios; así como por haberse abstenido de delimitar, demarcar y proteger efectivamente sus territorios.**
- 3- **El Estado de Panamá violó el derecho a la propiedad consagrado en el Artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma en perjuicio del pueblo indígena Kuna de Madugandi y sus miembros al haberse abstenido de realizar prontamente el reconocimiento, delimitación y demarcación , así como de brindar protección efectiva de los territorios de la Comarca Kuna de Madugandi frente a Terceros.**
- 4- **El Estado de Panamá violó los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la Convención, debido a la falta de provisión de un procedimiento adecuado y efectivo para acceder a la propiedad del territorio ancestral y para**

su protección frente a terceros, en perjuicio de los pueblos Kuna de Madugandi y Emberá del Bayano y sus miembros.

5- El Estado de Panamá violó el artículo 24 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la Convención, por el incumplimiento de su obligación de garantizar y respetar los derechos sin discriminación por origen étnico y de brindar protección igualitaria ante la ley, en perjuicio de los pueblos INDÍGENAS KUNA DE MADUGANDI Y EMBERÁ DEL BAYANO Y SUS MIEMBROS.

II. EXCEPCIONES PRELIMINARES.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo 42.1 del Reglamento de la Corte Interamericana, por el cual se determina el procedimiento de presentación de Excepciones dentro del proceso, procedemos a presentar las siguientes excepciones a las DECLARACIONES solicitadas por LOS REPRESENTANTES DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS EN ESCRITO DE SOLICITUDES ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS KUNA DE MADUGANDI Y EMBERA DE BAYANO CASO 12.354.

1. INVOCAMOS EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA POR NO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA DEL ESTADO DE PANAMA. (RATIONE MATERIAE)
2. INVOCAMOS EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS POR RAZON DE TIEMPO EN ATENCION DE LA CONVENCIÓN DE VIENA

SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS, POR HECHOS ACAECIDOS EN EL AÑO 1975,1976, 1977. (RATIONE TEMPORI)

3. POR PRESCRIPCION DEL SUPUESTO CREDITO ADEUDADO POR EL ESTADO DE PANAMA, CONFORME A LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNO Y DEL DERECHO INTERNACIONAL GENERALMENTE RECONOCIDOS. (EN REFERENCIA A LAS RECLAMACIONES PECUNIARIAS POR ABSTENCION DE INDEMNIZACIONES JUSTAS Y PRONTAS POR PARTE DEL ESTADO PANAMEÑO A LAS COMUNIDADES CUNA Y EMBERA.. (RATIONE TEMPORI)

1. INVOCAMOS EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA POR NO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA DEL ESTADO DE PANAMA, CONFORME A LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL GENERALMENTE RECONOCIDOS. (RATIONE MATERIAE)

EL **ESTADO DE PANAMA** no acepta los hechos contenidos en la consideraciones del Escrito DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS EN ESCRITO DE SOLICITUDES ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS KUNA DE MADUGANDI Y EMBERA DE BAYANO CASO 12.354, y excepciona en consideración a los siguientes **HECHOS**:

- 1) El **ESTADO DE PANAMÁ**, ha invocado en reiteradas ocasiones ante LA **COMISION** la inadmisibilidad de las pretensiones en torno a indemnizaciones, por el no haber interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, según los principios de Derecho Internacional, generalmente reconocidos.

El **ESTADO DE PANAMÁ**, mediante Nota de fecha 9 de julio de 2001, dirigida al Doctor JORGE E. TAINA Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, remitió Información Adicional ante nuevas solicitudes de información y en este Informe se señala:

“ La Republica de Panamá con fundamento en el Artículo 38 del Reglamento de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H) solicita formalmente se sirva declarar **INADMISIBLE** este caso por cuanto no cumple con la regla de agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna panameña. En Consecuencia, solicita a la Honorable Comisión Interamericana de

Derechos Humanos ORDENE EL ARCHIVO definitivo de este caso.”.¹

- 2) El **ESTADO DE PANAMÁ**, mediante informe de fecha 18 de junio de 2002, presento ante la COMISION “Oposición a la solicitud de Admisión de la petición POR EL NO AGOTAMIENTO DE RECURSOS INTERNOS .”, en dicha comunicación el Estado Panameño reitero:

“ El Gobierno de la República de Panamá, en su oportunidad, solicitó que la petición debe ser declarada inadmisibile, debido a que los peticionarios nunca agotaron, ni siquiera intentaron interponer, los recursos ante la jurisdicción interna.”

“ En mérito de los hechos expuestos en este escrito, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que **DECLARE INADMISIBLE LA PETICION DEL CASO. 12.354 Y ORDENE EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE**”.²

- 3) **LA DIRECCION NACIONAL DE POLITICA INDIGENISTA ADSCRITA AL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA**, dió respuesta a “**CUESTIONARIO SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS INTERNOS EN RELACIÓN A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS Y OTROS GRUPOS ÉTNICOS VULNERABLES .**”³

En esa oportunidad, se podrá observar que el funcionario, señaló de manera taxativa, la normatividad existente de los recursos internos en relación a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, señalando además que existe un ordenamiento legal igualitario para todos los PANAMEÑOS tal como se hace constar en su dicho:

“Exceptuando las leyes detalladas en la pregunta anterior, los recursos judiciales y administrativos existente **son los comunes**

¹ ANEXO 1 DE EXCEPCIONES del ESTADO, que corresponde, a las paginas 127 a 137 contenidas en Archivo 7.12.354 Expediente 1 de la información electrónica brindada por la COMISION. Nota de fecha 9 de julio de 2001, dirigida al Doctor JORGE E. TAINA Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

² ANEXO 2 DE EXCEPCIONES del ESTADO, que corresponde, a las paginas 26 a 42 contenidas en Archivo 8.12.354 Expediente 2 de la información electrónica brindada por la COMISION.

³ ANEXO 3 DE EXCEPCIONES DEL ESTADO. Que corresponde a las paginas 28 a 33, contenidas en el Archivo 7.12.354 Expediente 1.

para todos los ciudadanos según la legislación ordinaria y administrativa”.

- 4) EL ESTADO DE PANAMÁ, mediante Nota de fecha 14 de noviembre de 2001, dirigida al Doctor SANTIAGO CANTON Secretario Ejecutivo de la Comisión, remitió “RESUMEN DE LA PRESENTACION ANTE LA CIDH SOBRE LA PETICION No. 12.354 (PUEBLOS INDÍGENAS KUNA DE MADUGANDI Y EMBERA DE BAYANO DE PANAMA”) AUDIENCIA SOBRE ADMISIBILIDAD DE LA PETICION” expresó lo siguiente:

“Los peticionarios, en cualquiera de las etapas transcurridas durante la vida del conflicto pudieron, y todavía pueden hacer uso de los recursos, previstos en la Constitución Política y en las leyes panameñas, que son los siguientes:

1. Acción de Inconstitucionalidad.
2. La jurisdicción contenciosa Administrativa.
3. Las acciones y recursos que en todas las instancias garantizan las vías administrativas y judicial, en el marco del debido proceso.
4. El amparo de garantías constitucionales.
5. Recurrir a la Defensoría del Pueblo.”

El ESTADO en esta comunicación reiteró:

“Con base en todas las consideraciones precedentes, el Gobierno Panameño que represento, respetuosamente le solicita a la Ilustre Comisión que declare inadmisibile la petición.”

“Desde luego si el parecer de la Comisión fuera el de adelantar una vía de Solución amistosa, el Gobierno Panameño, estaría dispuesto a continuar el dialogo con los peticionarios hasta alcanzar una solución mutuamente convenida.”⁴ .

⁴ Anexo 4 que corresponde, a las paginas 26 a 42 contenidas en Archivo 8.12.354 Expediente 2 de la información electrónica brindada por la COMISION. Nota de fecha 14 de noviembre de 2001, dirigida al Doctor SANTIAGO CANTON Secretario Ejecutivo de la Comisión, remitió “RESUMEN DE LA PRESENTACION ANTE LA CIDH SOBRE LA PETICION No. 12.354 (PUEBLOS INDÍGENAS KUNA DE MADUGANDI Y EMBERA DE BAYANO DE PANAMA”) AUDIENCIA SOBRE ADMISIBILIDAD DE LA PETICION”

- 5) La Constitución del **ESTADO DE PANAMA** establece el derecho constitucional de recurrir contra los actos del Estado que vulnere los derechos de personas u organizaciones.:

ARTICULO 206. La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

1. La guarda de la integridad de la Constitución para lo cual la Corte en pleno conocerá y decidirá, con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de las Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella **cualquier persona**. Cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al conocimiento del pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de ésta, y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir. Las partes sólo podrán formular tales advertencias una sola vez por instancia.
2. **La jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los actos, omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos y autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. A tal fin, la Corte Suprema de Justicia con audiencia del Procurador de la Administración, podrá anular los actos acusados de ilegalidad; restablecer el derecho particular violado; estatuir nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas y pronunciarse prejudicialmente acerca del sentido y alcance de un acto administrativo o de su valor legal.**

Podrán acogerse a la jurisdicción contencioso- administrativa las personas afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate; y, en ejercicio de la acción pública, cualquier persona

natural o jurídica domiciliada en el país.

3. Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción.

Las decisiones de la Corte en el ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial.⁵ (Las negritas y los subrayados son nuestros).

Esta norma Constitucional en relación con demandas interpuestas contra el ESTADO y los actos de gobierno y funcionarios públicos, se desarrolla en la Ley Adjetiva, mediante las disposiciones contenidas en el Artículo 97 de la Sección 5ª del **CODIGO JUDICIAL** que desarrolla la Competencia de la **SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO** que dispone :

Sección 5a

Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo

Artículo 97. “A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas.

En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente:

1. De los decretos, órdenes, resoluciones o cualesquiera actos, sean generales o individuales, en materia administrativa que se acusen de ilegalidad;
- 2- De los actos, resoluciones, órdenes o disposiciones de los gerentes o de**

⁵ CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE PANAMA DE 1972, que es el marco constitucional vigente con sus actos reformativos de 1978,1983 y 2004. Artículo 206.

las juntas directivas o de Gobierno, cualesquiera que sea su denominación, de las entidades públicas autónomas o semiautónomas que se acusen de ser violatorias de las leyes, de los decretos reglamentarios o de sus propios estatutos, reglamentos y acuerdos;

3-De los Recursos Contenciosos en los casos de adjudicación de tierras y de bienes ocultos;

- 4- De las apelaciones, excepciones, tercerías o cualquier incidente en los procesos por cobro coactivo.**
- 5- De las cuestiones suscitadas con motivo de la celebración, cumplimiento o extinción de los contratos administrativos;**
- 6- De las cuestiones que se susciten en el orden administrativo entre dos o más municipios o entre dos o más instituciones autónomas o entre un municipio y la Nación o entre una institución autónoma y la Nación o entre cualesquiera de ellas;
- 7- De los acuerdos o cualquier acto, resolución o disposición de los Consejos Provinciales, los consejos municipales, juntas comunales y juntas locales o de las autoridades y funcionarios que de ellas dependan, contrarios a las leyes, a los decretos que las reglamenten o a sus propias normas;
- 8- De las indemnizaciones de que deban responder personalmente los funcionarios del Estado, y de las restantes entidades públicas, por razón de daños o perjuicios causados por actos que esta misma Sala reforme o anule;**
- 9- De las indemnizaciones por razón de la responsabilidad del Estado, y de las restantes entidades públicas, en virtud de daños o perjuicios que originen las infracciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier funcionario o entidad que haya proferido el acto administrativo impugnado;**
- 10- De las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las restantes entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos;
- 11- De la interpretación prejudicial acerca del alcance y sentido de los actos administrativos cuando la autoridad judicial encargada de decidir un proceso o la administrativa encargada de su ejecución, lo solicite de oficio antes de resolver el fondo del negocio o de ejecutar el acto, según

corresponda;

- 12- Conocer prejudicialmente sobre la validez de los actos administrativos que deberán servir de base a una decisión jurisdiccional por consulta que al efecto formule la autoridad encargada de administrar justicia;
- 13- Conocer del Recurso de Casación Laboral, a que se refiere el Capítulo IV, Título VIII, Libro Cuarto del Código de Trabajo, hasta tanto se instituya la Corte de Casación Laboral;
- 14- Ejercer todas las demás atribuciones que el Código de Trabajo atribuye a la Corte de Casación Laboral;
- 15- **Del proceso de protección de los derechos humanos mediante el cual la Sala podrá anular actos administrativos expedidos por autoridades nacionales y, si procede, restablecer o reparar el derecho violado cuando mediante dichos actos administrativos se violen derechos humanos justiciables previstos en las leyes de la República incluso aquéllas que aprueben convenios internacionales sobre derechos humanos. Este proceso se tramitará según las normas de la Ley 135 de 30 de abril de 1943 y de la Ley 33 de 11 de septiembre de 1946, pero no se requerirá que el agraviado agote previamente la vía gubernativa; el Procurador de la Administración sólo intervendrá en interés de la ley. (Las negritas y los subrayados son nuestros).**

Artículo 99. Las sentencias que dicte la Sala Tercera, en virtud de lo dispuesto en esta Sección, son finales, definitivas y obligatorias; no admiten recurso alguno, y las de nulidad deberán publicarse en lo Gaceta Oficial. ”⁶

6) EL ESTADO DE PANAMA, no ha recibido notificación o requerimiento ante los Tribunales competentes de la República de Panamá, Demandas, Reclamos, Denuncias, Querellas o solicitud por vía judicial , interpuestas por la **COMARCA CUNA DE MADUGANDI o de la COMARCA EMBERA DEL BAYANO** y sus miembros **POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DEL DECRETO DE GABINETE 156 DE 8 de**

⁶ Artículo 97 de la Sección 5ª del CODIGO JUDICIAL que desarrolla la Competencia de la SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Julio de 1971 y **SOBRE LOS ACUERDOS DE MAJECITO DE 5 DE FEBRERO DE 1975**, suscrito por los representantes de las comunidades de Ipeti y Piriati, pertenecientes a la **ETNIA EMBERÁ o POR INCUMPLIMIENTO del ACUERDO DE FARALLON de 29 de octubre de 1976**, suscrito por las autoridades **CUNAS de Madugandi**, acuerdos referentes al desplazamiento de grupos indígenas y sus indemnizaciones por la conformación del **Embalse del Bayano**, para la operación de la Hidroeléctrica Ascanio Villalaz, o de cualquier otro acuerdo, convenio o disposición normativa legal o administrativa en torno a este tema. Ni ha sido reclamado judicialmente, por la vía ejecutiva u ordinaria, ninguna suma al ESTADO DE PANAMA por incumplimiento de acuerdos posteriores a esos actos del **ESTADO**.⁷

EL **ESTADO DE PANAMA** no acepta los hechos contenidos en la consideraciones DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS EN ESCRITO DE SOLICITUDES ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS KUNA DE MADUGANDI Y EMBERA DE BAYANO CASO 12.354. y excepciona, en consideración a los siguientes fundamentos de **DERECHO**:

⁷ Certificación expedida por la SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DE PANAMA, en la cual se hace constar que en los Archivos de la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, no consta que se haya interpuesto demanda alguna contra el Estado Panameño por incumplimiento de los Acuerdo de MAJECITO, FARALLON o por los representantes de las comunidades IPETI, PIRIATI o por las autoridades de LA **COMARCA CUNA MADUGANDI**.

Certificación expedida por la Secretaria de la SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y LABORAL, en la cual se hace constar, los procesos CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS que se han presentado ante esa SALA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

- 1- El Artículo 42, del Reglamento de la CORTE IDH, en referencia a su ordinal 1, establece el derecho que le asiste al ESTADO PANAMEÑO, para oponer excepciones preliminares en la contestación de la petición.

- 2- EL ESTADO DE PANAMA, ha expuesto su derecho a presentar sus excepciones y ha solicitado del Archivo del Expediente, ante la COMISION, en reiteradas ocasiones, en tiempo oportuno y de conformidad a las disposiciones de LA CONVENCION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, y presenta esta solicitud de conformidad a lo establecido en el Artículo 46, en relación al ordinal 1, literal a.

- 3- La CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ha sido clara al manifestar en sus consideraciones que “El artículo 46.1.a) de la Convención Americana dispone que para determinar la admisibilidad de una petición o comunicación presentada ante la Comisión Interamericana, de conformidad con los artículos 44 o 45 de la Convención, es necesario que se hayan interpuesto y agotado los recursos de la jurisdicción interna, según los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”⁸

⁸ CORTE IDH. CASO *MASACRE DE SANTO DOMINGO VS. COLOMBIA*. SENTENCIA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones) párrafo 33 Pág. 12.

4- **EL ESTADO de PANAMA**, ha sido objeto de reiteradas DEMANDAS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, **DE REPARACIÓN DIRECTA E INDEMNIZACIÓN**, que han sido satisfechas a favor de los demandantes, con lo cual se demuestra la existencia de efectividad en los recursos interpuestos, son fallos recientes de la SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, que nos permiten afirmar y sin temor a equivocarnos, que no se han agotado las vías del derecho interno, por lo cual no puede por encima de todas las instancias internas, recurrir a la CORTE IDH, para dirimir indemnizaciones que no han sido solicitadas en la jurisdicción interna.⁹

5- Es evidente que existen los recursos judiciales pertinentes y adecuados

⁹ 1-DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INDEMNIZACIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CANDELARIO SANTANA EN REPRESENTACIÓN DE EDUARDO SANTOS VERGARA, PARA QUE SE CONDENE AL ESTADO (POLICÍA NACIONAL DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA), AL PAGO DE CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO BALBOAS (B/.105,968.00), POR DAÑOS Y PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES, EMANADOS DE LA SENTENCIA SC-17 DEL 16 DE FEBRERO DE 2004 DEL JUZGADO NOVENO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. PONENTE: ADÁN ARNULFO ARJONA L. -PANAMÁ, DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL OCHO (2008)

2- DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INDEMNIZACIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JUAN CASTILLO PINZON, EN REPRESENTACIÓN DE K.M.R.G., S. A., PARA QUE SE CONDENE A LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMA, AL PAGO DE B/3, 500, 000.00, EN CONCEPTO DE INTERESES E INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES - PONENTE: ALEJANDRO MONCADA LUNA - PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE MARZO DE DOS MIL ONCE (2011)..

3- DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS GALINDO ARIAS Y LOPEZ EN REPRESENTACIÓN DE ILDAURA QUINTERO DE RIOS, PARA QUE CONDENE AL ESTADO PANAMEÑO, AL PAGO DE \$13,515.86, EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR INFRACCION INCURRIDAS POR EL ORGANO EJECUTIVO. PONENTE: VICTOR MANUEL BENAVIDES PINILLA. VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE DOS MIL NUEVE (2009) y otras.

para perseguir el objetivo de pedir una indemnización al ESTADO, por ocasión de daños y perjuicios, falta de cumplimiento de acuerdos administrativos, leyes, decretos, ya sea propuestos por una persona o una corporación, contra una entidad Estatal o el mismo ESTADO, con lo cual se contempla el marco de referencia jurisprudencial de la CORTE, cuando expreso en el caso CORTE IDH. CASO *MASACRE DE SANTO DOMINGO VS. COLOMBIA*

“Lo anterior significa que no sólo deben existir formalmente esos recursos, sino que también deben ser adecuados y efectivos, como resulta de las excepciones contempladas en el artículo 46.2 de la Convención.”¹⁰

6- LA CORTE IDH, en reiteradas ocasiones ha señalado en su acervo jurisprudencial la necesidad de alegar la excepción de agotamiento de los recursos internos, en la primera actuación del Estado, durante el procedimiento ante la COMISION, para poder hacer valer dicha excepción.¹¹

CONCLUSIONES:

¹⁰ CORTE IDH. CASO *MASACRE DE SANTO DOMINGO VS. COLOMBIA*. SENTENCIA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2012 (Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones) párrafo 33 .

¹¹ CORTE IDH. CASO *SALVADOR CHIRIBOGA VS. ECUADOR*. SENTENCIA DE 6 DE MAYO DE 2008 (EXCEPCIÓN PRELIMINAR Y FONDO) PÁRRAFO 40 PÁG. 15.

- EL ESTADO DE PANAMA en tiempo oportuno ha alegado, la Excepción de agotamiento de los recursos internos y ha demostrado la existencia de Recursos, para proceder a solicitar ante los Órganos Jurisdiccionales de la REPUBLICA DE PANAMA, una satisfacción pecuniaria, existiendo un derecho contractual o extracontractual que deba ser reparado por el ESTADO, además se evidencia la absoluta accesibilidad a la reclamación de derechos.
- Las reclamaciones, por razón de supuestos incumplimientos de Acuerdos , en perjuicio del PUEBLO INDÍGENA CUNA DE MADUGANDI, y EMBERA WOUNAN, a saber, el ACUERDO DE MAJECITO, EL ACUERDO DE FARALLON suscrito el 29 de octubre de 1976 y EL ACUERDO FUERTE CIMARRON en el año 1977, así como el supuesto incumplimiento del Decreto de Gabinete Numero 156 de 8 de Julio de 1971, por el cual se establece un **“FONDO ESPECIAL DE COMPENSACION DE AYUDA PARA LOS INDIGENAS DEL BAYANO.”**, así como el acuerdo de la ESPRIELLA al cual se hace mención, no obstante no ha sido presentado en el caudal probatorio de las peticiones, **NO HAN SIDO DEMANDADOS ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA O ANTE LA SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMO ES PROCEDENTE, ADECUADO Y EFECTIVO.**
- Los pueblos indígenas KUNA DE MADUGANDI Y EMBERA DE BAYANO, al igual que la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, no han aportado una sola prueba de existencia de un proceso judicial o administrativo para el reclamo de supuestos incumplimiento de acuerdos, podemos observar que la COMISION en su INFORME DE FONDO, argumento 141, señala:

“ A lo largo del proceso de reclamaciones antes descrito, los pueblos indígenas Kuna de Madugandi y Emberá del Bayano dirigieron a través de sus autoridades tradicionales y/o representantes legales, múltiples comunicaciones a autoridades de nivel nacional, provincial, local; así como también interpusieron numerosas acciones de carácter administrativo y penal, con el objetivo de obtener el reconocimiento legal de sus territorios, lograr el pago de las indemnizaciones debidas y alcanzar la protección efectiva de sus territorios frente a la invasión de personas no indígenas y el daño ocasionados por estos a sus recursos naturales.”¹²

No obstante lo anterior no se aporta ninguna prueba documental de existencia de procesos de reclamos pecuniarios, por la construcción del embalse del Bayano, de igual manera no se individualiza un solo reclamo judicial o administrativo, para la obtención del reconocimiento de sus tierras, ya que la Comarca Kuna de Madugandi, a la fecha de presentación de sus reclamos ya habían sido plenamente reconocidas y las solicitudes de propiedad de tierras colectivas de los pueblos indígenas EMBERA WOUNAN, la primera solicitud se efectuó en el año 2009, al decir de la Comisión en su Informe, considerando 22 cuando afirma:

“En base a dicha ley, indicaron que en el 2009 presentaron una solicitud para obtener la titulación ante la Dirección Nacional de Reforma Agraria, institución que fue luego sustituida por la Autoridad Nacional de Tierras.”

Es importante destacar que esta Solicitud de peticiones, fue interpuesta en el año 2000 y los hechos reclamados datan del año 1970, no obstante reconocen los petentes CUNAS, que ya se les demarcó y otorgó reconocimiento mediante la creación de la

¹² Argumento 141 del Informe de Fondo No. 125/12 . Resumen

comarca KUNA MADUGANDI y en otro orden los reclamantes EMBERAS WOUNAN, por conducto de la COMISION a pesar de reclamar propiedades colectivas, no es hasta el año 2009, que hacen su primera solicitud por escrito, la cual de conformidad a los mismos petentes esta pendiente de resolución, más no se les ha negado de manera alguna ,acceso a dichas propiedades colectivas que en efecto han sido demarcadas.

- Ante la falta de agotamiento del Derecho Interno, solicitamos SE ACOJA LA PRESENTE EXCEPCION, en relación a todas y cada una de las peticiones formuladas por los Petentes, los cuales de conformidad al Derecho interno, cuentan con los recursos necesarios y apropiados para dirimir los daños y perjuicios, así como los supuestos incumplimientos de Acuerdos, Leyes, Decretos y cualquier otra normatividad, referida a sus Derechos Humanos en toda su integridad.

PRUEBA DOCUMENTAL:

A- Certificación expedida por la SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DE PANAMA, en la cual se hace constar que en los Archivos de la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, no consta que se haya interpuesto demanda alguna contra el Estado Panameño por incumplimiento de los Acuerdo de MAJECITO , FARALLON o por los representantes de las comunidades IPETI, PIRIATI o por las autoridades de **LA COMARCA CUNA MADUGANDI. Prueba aportada por el ESTADO DE PANAMA ,en la Contestación al Informe de Fondo de la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.**

B- B- Certificación expedida por la Secretaria de la SALA TERCERA DE

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y LABORAL, en la cual se hace constar, los procesos CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS que se han presentado ante esa SALA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.¹³ **Prueba aportada por el ESTADO DE PANAMA ,en la Contestación al Informe de Fondo de la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.**

C- ANEXO 1 DE EXCEPCIONES del ESTADO, que corresponde, a las páginas 127 a 137 contenidas en Archivo 7.12.354 Expediente 1 de la información electrónica brindada por la COMISION. Nota de fecha 9 de julio de 2001, dirigida al Doctor JORGE E. TAINA Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. **Prueba aportada por el ESTADO DE PANAMA ,en la Contestación al Informe de Fondo de la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.**

D- ANEXO 2 DE EXCEPCIONES del ESTADO, que corresponde, a las páginas 26 a 42 contenidas en Archivo 8.12.354 Expediente 2 de la información electrónica brindada por la COMISION. **Prueba aportada por el ESTADO DE PANAMA ,en la Contestación al Informe de Fondo de la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.**

E- ANEXO 3 DE EXCEPCIONES DEL ESTADO. Que corresponde a las páginas 28 a 33, contenidas en el Archivo 7.12.354 Expediente 1. **Prueba aportada por el ESTADO DE PANAMA ,en la Contestación al Informe de Fondo de la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.**

E- Anexo 4 que corresponde, a las páginas 26 a 42 contenidas en Archivo 8.12.354 Expediente 2 de la información electrónica brindada por la

¹³ **ANEXO 5 DE LA CONTESTACIÓN DEL ESTADO DE PANAMÁ A LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.**

COMISION. Nota de fecha 14 de noviembre de 2001, dirigida al Doctor SANTIAGO CANTON Secretario Ejecutivo de la Comisión, remitió “RESUMEN DE LA PRESENTACION ANTE LA CIDH SOBRE LA PETICION No. 12.354 (PUEBLOS INDÍGENAS KUNA DE MADUGANDI Y EMBERA DE BAYANO DE PANAMA”) AUDIENCIA SOBRE ADMISIBILIDAD DE LA PETICION”.

2. **INVOCAMOS EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA POR RAZON DEL TIEMPO DE LA OCURRENCIA DE LOS SUPUESTOS HECHOS QUE MOTIVAN LAS DECLARACIONES SOLICITADAS, “AL HABERSE ABSTENIDO DE OTORGAR UNA JUSTA INDEMNIZACION LUEGO DE MAS DE CUATRO DECADAS DE ENAJENADOS SUS TERRITORIOS ANCESTRALES. ” (RATIO TEMPORI)**

EL ESTADO DE PANAMA no acepta los hechos contenidos en la consideraciones del Escrito DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS EN ESCRITO DE SOLICITUDES ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS KUNA DE MADUGANDI Y EMBERA DE BAYANO CASO 12.354 y excepciona, en consideración a los siguientes **HECHOS:**

- 1) Los hechos referidos a las reclamaciones materiales (dinero) por razón de la reubicación de los pueblos indígenas originarios Cuna de Madugandi y Emberá del Bayano, a consecuencia de la construcción del embalse del Bayano, para la operación de la Hidroeléctrica Ascanio Villalaz, se dieron a partir del año 1971, con la promulgación del Decreto de GABINETE Número 156 de 8 de Julio de 1971, se establece **“FONDO ESPECIAL DE COMPENSACION DE AYUDA PARA LOS INDIGENAS DEL BAYANO.”**¹

¹ INFORME de Fondo No. 125/12 , ordinal 3. Resumen

2) Los hechos referidos a la supuesta violación de los derechos ancestrales sobre la propiedad de los pueblos indígenas CUNAS DE MADUGANDI y EMBERAS DE BAYANO, por razón del traslado de sus tierras ancestrales, se dio en los años 1972 al año 1976 de conformidad con lo señalado por la COMISION en su INFORME DE FONDO No. 125/12 , en el cual expresa en su considerando 2, fueron obligados en esta fecha, a abandonar su territorio ancestral.² Los reclamos en referencia a sumas cobradas en suma insuficiente o no cobradas, se refieren a los ACUERDOS DE MAJECITO (1975) ACUERDO DE FARALLON (1976) ACUERDO DE FUERTE CIMARRON (1977) y referido no presentado como evidencia ACUERDO DE LA ESPRIELLA, que supuestamente extendía pagos hasta el año 1985.

3) EL ESTADO DE PANAMA , ratificó la CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS el **5 de junio de 1978** y el **9 de mayo de 1990**, se **presentó instrumento fechado el 29 de febrero de 1990**, mediante el cual declara que RECONOCE COMO OBLIGATORIA DE PLENO DERECHO LA COMPETENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.³

² INFORME de Fondo No. 125/12 , ordinal 2. Resumen

³ <http://www.cidh.oas.org/Basicos/basicos3.htm> . COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

EL ESTADO DE PANAMA no acepta los hechos contenidos en la consideraciones DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS EN ESCRITO DE SOLICITUDES ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS KUNA DE MADUGANDI Y EMBERA DE BAYANO CASO 12.354. y excepciona, en consideración a los siguientes fundamentos de DERECHO:

- 1- El Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Panamá estatuye:

*“ARTICULO 46. Las leyes no tienen efecto retroactivo, las de orden público o de interés social **cuando en ellas así se exprese.** En materia criminal la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia y retroactividad, aún cuando hubiese sentencia ejecutoriada.”⁴*

- 2- En el caso sub júdice, el reclamo de dineros supuestamente adeudados por **acuerdos no cumplidos, o montos poco justos y retardados**, no se incorpora a nuestro bloque de constitucionalidad, como en efecto sucede con el artículo 8 de la CONVENCIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS sobre GARANTÍAS JUDICIALES, que en materia penal trascienden su irretroactividad en todo aquello, favorable al reo.
- 3- Las pretensiones de indemnizaciones supuestamente poco justas y no oportunas no se traduce en una norma de orden publico, ni es de interés de

⁴ CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE PANAMA DE 1972, que es el marco constitucional vigente con sus actos reformativos de 1978,1983 y 2004. Artículo 46.

la colectividad e integridad del ESTADO NACIONAL, el supuesto derecho reclamado emana de una manifestación de respeto a los derechos ancestrales de los grupos indígenas que consecuentemente y necesariamente exige del ESTADO DE PANAMA , el satisfacer los gastos y mitigar el proceso e impacto de reubicación de las tierras ancestrales, que a nadie es ajeno significó, un sacrificio de un grupo de personas, en beneficio de toda la NACIÓN y que fueron mitigados con la asignación y protección de comarcas, tierras colectivas e indemnizaciones que, ha sido aceptado que fueron recibidas, pero con el transcurrir del tiempo, han sido consideradas insuficientes.

- 4- La ley interna en este caso, el Decreto de Gabinete 156 de 8 de Julio de 1971, solo estableció la retroactividad de la norma, a la fecha 1 de enero de 1971, fecha en la cual se determino que se pagaría de manera retroactividad, el 30 % del pago de los aforos por permiso de extracción de madera, se daría en compensación a favor de los pueblos indígenas que serían removidos de las tierras originarias por razón de la conformación del embalse del Bayano.

- 5- La CORTE ha sido clara en la elaboración de sus conceptos de interpretación de la norma cuando en el caso de las Hermanas SERRANO CRUZ vs. EL SALVADOR, en sentencia de 23 de noviembre de 2004 (Excepciones Preliminares) señala en su considerando 64:

“Debido a que la fecha de aceptación de la competencia de la Corte depende, de acuerdo con el artículo 62.1 de la Convención, del momento en que el Estado declara que

reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana, la Corte debe tener presente lo dispuesto en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, al determinar si tiene o no competencia para conocer un caso. Dicho artículo dice lo siguiente:

Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.”⁵

6- LA CORTE IDH, de igual manera en este Fallo reitera en su considerando 65, del mismo fallo sentenció que :“ El anterior principio de irretroactividad se aplica a la vigencia de los efectos jurídicos del reconocimiento de la competencia de la Corte para conocer de un caso contencioso, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, la Corte puede conocer de los actos o hechos que hayan tenido lugar con posterioridad a la fecha de reconocimiento de la competencia del Tribunal y de las situaciones que a dicha fecha no hubieren dejado de existir. Es decir, el Tribunal tiene competencia para conocer de violaciones continuas que siguen ocurriendo con posterioridad a dicho reconocimiento, con base en lo estipulado en el referido artículo 28 y, consecuentemente, no se infringe el principio de

⁵ CASO DE LAS HERMANAS SERRANO CRUZ vs. EL SALVADOR, en sentencia de 23 de noviembre de 2004 (Excepciones Preliminares) Considerando 64

irretroactividad.”⁶

7- Es reiterado el criterio de la CORTE IDH, en el sentido de reconocer la irretroactividad de las normas internacionales consagrados en la convención de Viena, sobre el derecho de los Tratados.⁷

8- EL ESTADO DE PANAMA por ley 65 del 4 de febrero de 1963 “ APRUEBA LA CONVENCION DE VIENA DE 1961, SOBRE RELACIONES DIPLOMATICAS Y SUS PROTOCOLOS ANEXOS; EL PROTOCOLO FACULTATIVO SOBRE LA JURISDICCION OBLIGATORIA PARA LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y PROTOCOLO F. ADQUISICION DE NACIONALIDAD.

4) Ante los hechos y los derechos referidos es evidente que la competencia de la CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, se hace vigente **desde el 29 de febrero de 1990**, fecha desde la cual se RECONOCE COMO OBLIGATORIA DE PLENO DERECHO LA COMPETENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS sobre todos los casos relativos a la

⁶ CASO DE LAS HERMANAS SERRANO CRUZ vs. EL SALVADOR, en sentencia de 23 de noviembre de 2004 (Excepciones Preliminares) Considerando 65.

⁷ Caso ALFONSO MARTIN DEL CAMPO DODD vs ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SENTENCIA DE 3 DE SEPTIEMBRE DE 2004 (Excepciones Preliminares) Considerando 85.

interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.⁸

CONSIDERACIONES:

- Los actos referidos a supuestos deudas de la NACIÓN, en atención a promoción de actos de desarrollo, como lo fue la construcción de la Hidroeléctrica del Bayano, por razones de utilidad y seguridad pública, que han de ser considerados a la luz de la competencia de la CORTE. Es de interés, señalar que no nos encontramos, ante actos de violencia física, material, psicológica, o cualquiera de las modalidades de sojuzgar el espíritu humano, que ponen en peligro toda la integridad del ESTADO, en este caso no hubo interés dirigido a afectar derechos, por el contrario de manera planificada y concertada se desarrolló, una de las etapas más importantes en el desarrollo de la República de PANAMA.
- En referencia a las consideraciones de las presuntas víctimas en su escrito de consideraciones, a página 4, en el ordinal 2 al señalar los argumentos por los cuales formulan sus solicitudes señalan:

“La falta de reconocimiento, titulación, demarcación de las tierras de la Comarca Kuna de Madugandi **por un período de tiempo comprendido dentro de la competencia temporal de la Corte**”. (el resaltado es nuestro.)

⁸ <http://www.cidh.oas.org/Basicos/basicos3.htm> . COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Es evidente que para la fecha de la interposición de las solicitudes respectivas, ya se había demarcado y aprobado por ley la Comarca Madugandi, pero es interesante que observe la CORTE, el reconocimiento que admiten las presuntas víctimas en relación a la competencia temporal de la Corte, que tiene igual valor para todas las otras consideraciones y solicitudes y las excepciones oportunamente formuladas por el ESTADO DE PANAMA.

- No existe en los hechos planteados una intención dirigida del ESTADO para causar un daño a una etnia o un grupo social, ni siquiera a un ser humano, que pueda ser individualizado en la colectividad petente. La construcción de carreteras, de Hidroeléctricas, la formulación de agricultura masiva, la necesidad de promover más fuente de alimento, nos llevarán de manera necesaria al constante intercambio de ideas para lograr la paz social, dentro del marco de los respetos de los derechos humanos, y sobre todo señores JUECES, contando con la SEGURIDAD JURIDICA plataforma sobre la cual ha de levantar la difícil función de DICTAR - JUSTICIA.

Por lo expuesto Solicitamos a la Corte, acoja nuestra EXCEPCIÓN PRELIMINAR a los supuestos pagos adeudados y/o no adecuados y en referencia a las otras consideraciones y solicitudes de las presuntas víctimas, por la construcción del embalse del Bayano, para la operación de la Hidroeléctrica Ascanio Villalaz.

PRUEBAS.

A-- Proponemos PRUEBA DOCUMENTAL el Resumen del
INFORME DE FONDO No. 125/12 Caso 12.354 PUEBLOS
INDIGENAS KUNA DE MADUGANDI Y
EMBERA DE BAYANO Y SUS MIEMBROS.

3. INVOCAMOS EXCEPCIÓN PARCIAL DE FALTA DE COMPETENCIA POR PRESCRIPCIÓN DEL SUPUESTO CREDITO ADEUDADO POR EL ESTADO DE PANAMA, CONFORME A LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL GENERALMENTE RECONOCIDOS. (EN REFERENCIA A LAS RECLAMACIONES PECUNIARIAS POR ABSTENCION DE INDEMNIZACIONES JUSTAS Y PRONTAS POR PARTE DEL ESTADO PANAMEÑO A LAS COMUNIDADES CUNA Y EMBERA.. (RATIONE TEMPORI)

EL ESTADO DE PANAMA no acepta los hechos contenidos en la consideraciones del Escrito DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS EN ESCRITO DE SOLICITUDES ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS KUNA DE MADUGANDI Y EMBERA DE BAYANO CASO 12.354y excepciona, en consideración a los siguientes HECHOS:

- 1) Los pueblos indígenas **CUNA DE MADUGANDI Y EMBERA**, del BAYANO reclaman pagos indemnizatorios, por supuestos hechos y acuerdos acaecidos en el año, 1971, 1975, 1976 y 1977 respectivamente en razón de las inundaciones de tierras ancestrales, por la construcción del embalse del Bayano, para la construcción de la Hidroeléctrica Ascanio Villalaz, a saber **POR INCUMPLIMIENTO del DECRETO de GABINETE 156 de fecha de 8 de Julio de 1971, ACUERDO DE MAJECITO de 1975, suscrito por los representantes de las comunidades de Ipeti y Piriati, pertenecientes a la ETNIA EMBERÁ y**

por incumplimiento del ACUERDO DE FARALLON de 29 de octubre de 1976 y ACUERDO DE CIMARRON de fecha 1977, suscrito por las autoridades CUNAS DE MADUGANDI , acuerdos referentes al desplazamiento de grupos indígenas por la conformación del Embalse del Bayano, para la operación de la Hidroeléctrica Ascanio Villalaz .¹

- 2) No obstante, la norma que suscribe una voluntad Estatal de dar una indemnización a los pueblos CUNA y EMBERA, en razón **al desplazamiento de grupos indígenas por la conformación del Embalse del Bayano, para la operación de la Hidroeléctrica Ascanio Villalaz** data del año 1971 con la promulgación del DECRETO DE GABINETE NUMERO 156 DE 8 DE JULIO DE 1971, por el cual dentro del FONDO FORESTAL DEL ESTADO, se crea un FONDO ESPECIAL DE COMPENSACION Y AYUDA para los indígenas que habitan dentro del área de la actual Reserva Indígena del Bayano y dentro de las áreas declaradas inadjudicables por el Decreto de Gabinete No. 123 del 8 de mayo de 1969.
- 3) EL FONDO ESPECIAL DE COMPENSACION Y AYUDA estaba formado:
- a- Por el 30% (treinta por ciento) del monto total de las aforos que han ingresado al Fondo Forestal a partir del 1 de enero de 1971, como resultado de permisos o concesiones otorgadas por el SERVICIO FORESTAL del Ministerio de Agricultura y Ganadería para la extracción de madera en el área de la actual Reserva Indígena del Bayano.

¹ INFORME DE FONDO COMISION No. 125/12 , ordinal 2 y subsiguientes Resumen

b- El 30 % (treinta por ciento) del monto total de los aforos que ingresen al Fondo Forestal del Estado por razón de otorgamiento de permisos o concesiones por la extracción de manera en el área de la actual Reserva Indígena del Bayano, dentro de un plazo de **tres (3) años improrrogables** a partir de la fecha de la promulgación del presente Decreto de Gabinete. ²

4) Que con absoluto respeto a su dignidad humana y en reconocimiento de sus derechos de propiedad ancestral de los originarios, estos fueron consultados, se suscribieron acuerdos, se modificaron dichos acuerdos y en efecto se hicieron pagos y se dio cumplimiento a los compromisos de establecer el ordenamiento jurídico de sus territorios ancestrales. ³

5) Los hechos indican, que han transcurrido desde al año 1971, a la fecha, 42 años de la formulación del Decreto 156, que da fundamento al reclamo, que es parte de esta SOLICITUD DE DECLARATORIA internacional.

El último acuerdo financiero reclamado se afirma data de 1980, en referencia al Acuerdo de LA ESPRIELLA de 1980, **cuyo texto no se advierte incorporado a este bloque probatorio**, que señalan promueve pagos por 5 años adicionales.

² DECRETO DE GABINETE NUMERO 156 DE 8 DE JULIO DE 1971.
<http://panama.justia.com/federales/decretos-de-gabinete/decreto-de-gabinete-156-de-1971-jul-26-1971/gdoc/>.
ARTICULO 2.

³ INFORME DE FONDO COMISION No. 125/12 , ordinal 2 y subsiguientes Resumen.

6) El informe presentado por las comunidades indígenas CUNA Y EMBERA, titulado “COMPONENTE DE INDEMNIZACION” contenido en el INFORME SOCIO ECONOMICO SOBRE LA INDEMNIZACION E INVERSION DE LA COMARCA KUNA DE MADUGANDI Y DE LAS TIERRAS COLECTIVAS EMBERA PIRIATI Y MAJE CORDILLERA.”, señala que dichos pagos debieron efectuarse en un termino, no superior al año 1985, por lo cual desde esa fecha han trascurrido 28 años desde la ultima ocurrencia, de la supuesta obligación de cancelar suma alguna por parte del ESTADO.⁴

7) El CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE PANAMA, en su Artículo 1086 preceptúa:

ARTICULO 1086: “ Las deudas a cargo del Tesoro se extinguen:

- 1- Por su pago.
- 2- Por prescripción de quince años, la cual se interrumpe por gestión administrativa o por demanda judicial legalmente notificada.”

De la norma Fiscal vigente, que forma parte del acervo jurídico nacional se desprende que de existir los créditos o adeudos alegados, ante la inexistencia de una formal solicitud a las autoridades administrativas o por demanda judicial legalmente notificada, las mismas han prescrito.

⁴ ANEXO 6 DEL INFORME DE FONDO DE LA COMISION. “INFORME TÉCNICO SOCIO-ECONÓMICO SOBRE LA INDEMNIZACIÓN E INVERSIÓN DE LA COMARCA KUNA DE MADUGANDI Y DE LAS TIERRAS COLECTIVAS EMBERA, PIRIATI, IPETI Y MAJE CORDILLERA”, elaborado por el CONGRESO GENERAL DE MADUGANDI Y TIERRAS COLECTIVAS EMBERA BAYANO

- 8) Gestión Administrativa en nuestro Derecho Interno, son las gestiones formales de cobro, mediante solicitud de Gestión de Cobro, debidamente presentadas a las autoridades respectivas a saber, Ministerio de Economía y Finanzas, entidades autónomas o semiautónomas, Contraloría General de la República o cualquiera entidad pública ante la cual se alegue, la existencia de un crédito.

Dicha solicitud debe contener, el contrato o relación comercial o adeudo de que se trate, sea acuerdo, sentencias, decretos, leyes y la individualización del ciudadano o ciudadanos, grupos o entidades que formulan la solicitud y que acrediten su existencia jurídica y material, la referida autoridad que contrato los servicios o adquirió el compromiso, violó la ley, afectó derechos humanos, y la cuantía alegada como debida y los actos de reparación que conllevan las sentencias restauradoras de los derechos humanos afectados..

- 9) Es evidente, como observamos en la Solicitud de la COMISION no existe evidencia alguna que se hubiese presentado de manera formal a alguna autoridad pública, administrativa o judicial, reclamo alguno por parte de las COMARCA CUNA DE MADUGANDI y COMARCA EMBERA, en referencia a los supuestos adeudos por conformación del embalse del Bayano, para la construcción de la Hidroeléctrica ASCANIO AROSEMENA, sea por el Decreto de Gabinete 156 de 8 de Julio de 1971.

Como quiera que se ha probado de manera, fehaciente que han transcurrido, más de cuatro décadas desde la fecha de los supuestos actos

iniciales y más de dos décadas de los supuestos actos finales, que dieron lugar a la presente petición, solicitamos desestimar el reclamo financiero, por haber prescrito de conformidad al derecho interno, la posibilidad de reclamar estos supuestos derechos.

PRUEBA: DOCUMENTAL:

A- Certificación expedida por la SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DE PANAMA, en la cual se hace constar que en los Archivos de la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, no consta que se haya interpuesto demanda alguna contra el Estado Panameño por incumplimiento de los Acuerdo de MAJECITO , FARALLON, por los representantes de las comunidades IPETI, PIRIATI o por las autoridades de LA **COMARCA CUNA MADUGANDI**.

B-Certificación expedida por la Secretaria de la SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y LABORAL, en la cual se hace constar, los procesos CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS que se han presentado ante esa SALA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Por todo lo expuesto SOLICITAMOS A LA HONORABLE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ACOJA DE CONFORMIDAD a lo preceptuado en el Artículo 42.1 del Reglamento de la Corte Interamericana nuestras excepciones Y POR ENDE ORDENE EL ARCHIVO DEL CASO 12.354 Caso propuesto por los pueblos indígenas CUNA DE MADUGANDI y EMBERA WOUNNAN.

EL ESTADO DE PANAMA se opone a las solicitudes de declaraciones de las presuntas víctimas de la comunidades **KUNA-MADUGANDI Y EMBERÁ DE ALTO BAYANO**, en consideración a los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

CONTESTACION A LA PRIMERA DECLARACION SOLICITADA POR LA REPRESENTACIÓN DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS DE LAS COMUNIDADES KUNA DE MADUGANDI Y EMBERAS DE ALTO BAYANO.

“El Estado de Panamá violó el artículo 21 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los PUEBLOS INDÍGENAS KUNA DE MADUGANDI Y EMBERA del Bayano y sus miembros, al haberse abstenido de otorgar una justa y pronta indemnización, luego de más de cuatro décadas de enajenados sus territorios ancestrales.”

Las presuntas víctimas señalan como argumento a esta solicitud.

“Violación continua al derecho de propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas Kuna de Madugandi y Emberá de Alto Bayano de Panamá y sus miembros debido al incumplimiento del ESTADO DE PANAMÁ del Pago de Indemnizaciones Económicas derivadas del Desalojo e inundaciones de los territorios ancestrales de las presuntas Víctimas.”

La primera declaración hace referencia a la violación del Artículo 21 de la Convención referido al **“DERECHO A LA PROPIEDAD”** en relación al artículo 1.1, que señala: “ Toda persona tiene el derecho al uso y goce de sus bienes. **La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.**” (el subrayado es nuestro)

La supuesta violación, tiene su fundamento o razón de ser, de conformidad a lo afirmado por los petentes, en que **EL ESTADO DE PANAMA se ha abstenido de otorgar una justa y pronta indemnización, luego de más de cuatro décadas de enajenados sus territorios ancestrales.” Y como argumento sostenido por las víctimas se señala que la declaración solicitada es debido **al incumplimiento** del Estado de Panamá del Pago de Indemnizaciones Económicas derivadas del **Desalojo e inundaciones de los territorios ancestrales de las presuntas víctimas.**” (El subrayado y negritas es nuestro).**

La pretensión material de las presuntas víctimas se encuentra contenida en **“INFORME TECNICO SOCIO-ECONOMICO SOBRE LA INDEMNIZACION E INVERSION DE LA COMARCA KUNA DE MADUGANDI Y DE LAS TIERRAS COLECTIVAS EMBERA PIRIATI, IPETI Y MAJE CORDILLERA.”**

NOS OPONEMOS A LA PRIMERA DECLARACIÓN SOLICITADA POR NO SER CIERTA, CON FUNDAMENTO EN LAS SIGUIENTES RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO:

PRIMERO: El Estado de Panamá, mediante Gaceta Oficial Número 6934 de 13 de noviembre de 1934, sanciona la Ley 18 de 8 de noviembre de 1934 sobre RESERVAS INDIGENAS en la cual se da tratamiento a los territorios originarios en la Provincia de Bocas del Toro y Panamá, protegiendo tres sitios ancestrales a saber:

- a) Región Indígena de Cricamola,
- b) Región Indígena de Gusapin y Bluefield,
- c) **Región Indígena de Alto Bayano.**²⁶

De esta disposición se colige de manera inequívoca, que desde el año 1934, el Estado dio reconocimiento especial a los indígenas de la REGION DE ALTO BAYANO cuando dispone:

Artículo 1: Declárense reservas indígenas, las tierras baldías en los siguientes lugares en las Provincias de Bocas del Toro y Panamá:

.....

REGION INDIGENA DE ALTO BAYANO: “Las tierras baldías que habitan las tribus indígenas de MAJE, PINTUPO, PIRIA y CAÑAZAS, de conformidad con el plano oficial levantado en el mes de octubre de 1932, por el Agrimensor Oficial señor BLAS HUMBERTO DANIELLO, cuyo plano lleva el numero de orden B-6442, en el Archivo de la Secretaria de Instrucción Publica.”

Artículo 2: Las tierras de que tratan los artículos anteriores serán poseídas en común por las tribus aborígenes que las habitan y no podrán **ser enajenadas, ni arrendadas**”. (el subrayado y resaltado es nuestro).

Esta disposición normativa, dispone a favor del pueblo Cuna y Emberá,

²⁶ Ley 18 de 1934 <http://docs.panama.justia.com/federales/leyes/18-de-1934-nov-13-1934.pdf>

ochenta y siete mil (87,000) hectáreas de tierras como reserva Indígena, en la Región de BAYANO, información corroborada por la ilustre COMISION, que señala en sus considerandos del Informe de Fondo:

74. “La CIDH observa que, como el texto de la ley señala, la calificación como “reserva indígena” de la zona del Alto Bayano, fue realizada en base al trabajo de medición llevado a cabo en 1932 por el agrimensor Blas Humberto D’Anello, al que hace referencia la citada descripción de la expedición. Según información aportada por las partes y otras fuentes de público conocimiento, la superficie de la Reserva Indígena del Alto Bayano consistía entre 87.000 y 87.321 hectáreas²⁷. ”

Es necesario de manera adicional, informar a la CORTE que dicho reconocimiento territorial nace de un respeto especial del ESTADO con la Nación Indígena, así lo demuestran epístolas cursadas por los dirigentes indígenas y el Presidente de la República de ese entonces, Presidente **HARMODIO ARIAS MADRID**, que dice relación a la premura e interés que se ha prestado de manera histórica a los derechos indígenas,²⁸ es así como con fecha 18 de septiembre de 1935, MANUEL FERNANDEZ SAGUILA DE PINTUPO, agradece la creación de la RESERVA INDIGENA DEL BAYANO y solicitaba al señor Presidente del Estado, protección a sus tierras que eran objeto de incursiones de ciudadanos extranjeros y se apreciará, la inmediata respuesta por parte del dignatario del ESTADO PANAMEÑO. (Anexo 1).

²⁷ Anexo 11. Documento final de diagnóstico de la Mesa de Concertación de Zona Bayano del 2 de julio de 1999. Anexo 31 de la petición inicial de los peticionarios de fecha 11 de mayo de 2000. pp. 20-21; Anexo 13. Informe y Recomendación de la Comisión Intergubernamental. Anexo 21 de la comunicación del Estado de fecha 29 de junio de 2001. Igualmente, documentos académicos hacen referencia a que se trataría de una extensión de cercana a las 87,000 hectáreas. Reina Torres de Araúz. “Cunas (Tules)”. En: *Panamá indígena*. Panamá: Autoridad del Canal de Panamá. 1999. p. 174; Anexo 1. Esther Urieta Donos, tesis “Ipeti-Choco: Una comunidad Indígena de Panamá afectada por una Presa Hidroeléctrica”. Universidad Veracruzana, Facultad de Antropología, 1994. p. 32. Anexo C del escrito de observaciones adicionales sobre el fondo de los peticionarios, recibido por la CIDH el 18 de diciembre de 2009; Escrito del Estado de fecha 14 de mayo de 2012, recibido por la CIDH en la misma fecha; y Anexo 2. Informe Final de la Comisión Nacional de Límites Político-Administrativo sobre la Demarcación Física de la Comarca Kuna de Madungandí de 2000. Anexo 3 del Escrito de los peticionarios del 13 de julio de 2012, recibido por la CIDH en la misma fecha.

²⁸ <http://bdigital.binal.ac.pa/iah/pdf/4.32.2.9.pdf>

En este sentido es necesario denotar que la Comisión como las presuntas víctimas aceptan que el **ESTADO DE PANAMA**, reconoce el derecho a la propiedad de las presuntas víctimas, pues su derecho de tenencia, uso y goce de dichos territorios ha sido y es históricamente garantizado por instrumentos legales y constitucionales, que les protegen.

SEGUNDO: Los supuestos compromisos financieros no cumplidos, de conformidad a las presuntas víctimas, tienen sus antecedentes en acuerdos suscritos con representantes del **ESTADO DE PANAMÁ** a saber:

- 1- ACUERDO DE MAJECITO.(5 de febrero de 1975)
- 2- ACUERDO DE FARALLON. (29 de octubre de 1976)
- 3- ACUERDO DE FUERTE CIMARRON.(25 de enero de 1977)
- 4- ACUERDO DE LA ESPRIELLA (1980) No aportado al proceso solo enunciado.

Se hace necesario examinar estos acuerdos a fin de establecer la existencia de los supuestos reclamos (causa petendi) , así vemos lo siguiente:

- 1- **EL ACUERDO DE MAJECITO²⁹**, de fecha 5 de febrero de 1975 suscrito por el Cacique **ANGELINO DURAN** y su Secretario **RUFINO CUMAMPIO**, que dice relación directa con los grupos **EMBERA- CHOCOE** y el **PROYECTO PARA EL DESARROLLO DEL BAYANO**, establece los lineamientos generales para el traslado

²⁹ Anexo 19 del Informe de Fondo de la COMISION, Pág. 254 y 255

de la comunidad de MAJECITO, formulando como obligaciones pecuniarias a favor de las supuestas víctimas lo siguiente:

- 1- Se entregarán parcelas para el desarrollo ganadero a aquellas familias que actualmente se dedican a esa actividad.
- 2- Se distribuirán parcelas familiares para el desarrollo agrícola.
- 3- Se seleccionara una parcela para la formación de la comunidad.
- 4- Se establecerán parcelas para los trabajos en conjunto.
- 5- Dotación de pozo para el suministro de agua.
- 6- Desarrollo de Programa de Construcción de viviendas y plan de producción, mediante contratos independientes siguiendo las siguientes clausulas:
 - a- **Se establecerá un salario de B/ 2.50**
 - b- Se proveerá un subsidio alimenticio complementario.
 - c- Se fijará un plazo para terminar el plan de vivienda y el plan de producción.

2- EL ACUERDO DE FARALLON³⁰ de fecha 29 de octubre de 1976 suscrito por el Primer Cacique General de Aguas Claras, **LEONIDAS BRENES, el SEGUNDO CACIQUE SANTIAGO AVILA** y su Secretario **TEMISTOCLES HENRIQUEZ**, que dice relación directa con los grupos **CUNA-MADUGANDI (BAYANO)** establece como obligaciones a favor de las supuestas victimas lo siguiente:

³⁰ Anexo 18 del Informe de Fondo de la COMISION, Pág. 250 y 252

- 1- Demarcar las reservas y reubicar **los colonos e indios Chocoes** que se encuentran en el área **que perjudique a los Kunas**, esta reubicación se hará previa consulta con los grupos afectados. **(Lo resaltado en negrita y subrayado es nuestro.)**
- 2- Las Riveras del Río Cañazas, se dejará para la explotación exclusiva de los indios Kunas, que utilizaran la madera para la construcción de sus viviendas, piraguas y demás usos botánicos.
- 3-El Gobierno se compromete a llevar agua potable a las comunidades indígenas, tanto a las existentes como a las nuevas comunidades que sean necesarias crear.
- 4- Queda cancelado todo permiso de cacería en el área que será de uso exclusivo de los residentes indígenas. Los residentes podrán cazar con el permiso previo de los caciques.
- 5- Se acelerará el pago de los árboles, frutales inundados, de los cuales ya se hizo inventario.
- 6-Acondicionar el sitio de la Población **IPETI ARRIBA.**
- 7- Crear una Policía Forestal y de caza con la debida autoridad y a la cual se dotara de distintivo y escopeta. Los miembros serán nombrados de común acuerdo entre el Jefe de Gobierno y los Caciques Kunas.
- 8- El Gobierno construirá en la Población de Aguas Claras un Centro de Salud con atención permanente para atender las necesidades de esa comunidad.

Como podrá observar la Corte, **NO EXISTE EN ESTE DOCUMENTO**

DE ACUERDO, para la implementación y reubicación de las comunidades Cunas ninguna obligación de carácter pecuniaria directa, **salvo el pago de los árboles frutales, inundados, que ya habían sido inventariados.**

3- EL ACUERDO DE FUERTE CIMARRON³¹ de fecha 25 de ENERO de 1977 suscrito por el Primer Cacique General de Aguas Claras **LEONIDAS BRENES**, el **SEGUNDO CACIQUE SANTIAGO AVILA** y su Secretario **TEMISTOCLES HENRIQUEZ**, además del **SAHILA DE IPETI**, **SAHILA DE IBENIGANA** y el **SAHILA DE PINTUPO**, con el objeto de **consolidar la coordinación establecida en el Acuerdo de Farallón**, comprometiéndose **EL ESTADO DE PANAMA** por conducto de la Corporación Bayano a lo siguiente:

- 1- La Corporación Bayano se compromete y los Representantes Indígenas aceptan el siguiente programa de pago para actualizar los compromisos atrasados en concepto de indemnización y construcción de viviendas:
 - Febrero (cancelar los meses de septiembre y octubre)
 - Marzo (cancelar los meses de noviembre y diciembre)
 - Abril (cancelar los meses de enero y febrero)
 - Mayo (cancelar los meses de marzo y abril).
- 2- La Corporación Bayano y el Ministerio de Salud se comprometen a iniciar las inspecciones en las diferentes comunidades indígenas para ubicar el área de construcción de los pozos artesianos.
- 3- La Corporación Bayano se compromete a reconocerle una suma de dinero a las comunidades indígenas por la extracción de**

³¹ INFORME DE FONDO COMISION No. 125/12 , Considerando 80, pág. 24. Resumen

madera. Este porcentaje será establecido teniendo en cuenta los intereses e inversiones de la Corporación Bayano y los intereses de los Indígenas. Los dirigentes Kunas de Alto Bayano designaran un representante para que coordine con la Dirección de Planificación y Finanzas de la Corporación el monto de esta suma.

- 4- La Corporación Bayano y los representantes indígenas por mutuo acuerdo establecieron iniciar la extracción de madera de manera inmediata en el Área de Ipeti e Ibesigana, exceptuando las especies Espave y Cedro Amargo. **(Extracción 4 meses).**

De este resumen normativo de acuerdos se deduce que son dos acuerdos el de **MAJECITO con el Pueblo EMBERA** y el de **FARALLON con el Pueblo Cuna**, teniendo una adenda en el Acuerdo de Fuerte Cimarrón.

4- ACUERDO DE LA ESPRIELLA: se enuncia que fue firmado en 1980 y que extendía el pago de indemnizaciones por cinco años más, es decir hasta 1985. No han presentado los peticionarios el referido acuerdo y EL ESTADO DE PANAMA ha procurado obtener dicho documento y no ha podido individualizar, el referido acuerdo a pesar de esfuerzos realizados, en tal sentido.

TERCERO: EI ESTADO DE PANAMÁ cumplió todo y cada uno de los acuerdos suscritos ya que, el proceso de reconocimiento de los derechos sobre los territorios habitados por indígenas en la región de Bayano y la mitigación de cualquiera afectación por la construcción de la Represa del Bayano da inicio en el marco legislativo panameño, mediante Decreto de Gabinete 123 de 8 de mayo de 1969 (Gaceta Oficial 16367 viernes 23 de mayo 1969),“**Por el**

cual se declaran inadjudicables unas tierras y se suspenden los trámites de unas solicitudes de adjudicación.”, en esta norma se establece el marco de referencia de disposición de tierras, para compensar las que serían utilizadas en razón de un interés social común del **ESTADO**, así señala la norma en su parte motiva:

“ Que con motivo de la construcción del Proyecto del Rio Bayano, parte de la actual Reserva Indígena, en el Alto Bayano, será inundada por la obra de embalse”.

“Que es deber del ESTADO proveer el área necesaria para la reubicación de los moradores de la reserva mencionada desalojadas por la obra del embalse.”³²

El reconocimiento del derecho de las tierras ocupadas por los indígenas trae como consecuencia necesaria, justa y humanitaria la reubicación y el consecuente pago a las supuestas victimas, derecho que se deriva del reconocimiento expreso del **ESTADO DE PANAMÁ** de la propiedad de las tierras ancestrales.

El **Decreto de Gabinete Numero 156 de 8 de Julio de 1971**, por el cual se establece un **“FONDO ESPECIAL DE COMPENSACION DE AYUDA PARA LOS INDIGENAS DEL BAYANO.”**, establece el marco financiero legal que ha de dar contenido a las indemnizaciones por el traslado de sus tierras y la reubicación, que en su parte motiva establece:

³² Decreto de Gabinete 123 de 8 de mayo de 1969 (Gaceta Oficial 16367 viernes 23 de mayo 1969), **“Por el cual se declaran inadjudicables unas tierras y se suspenden los trámites de unas solicitudes de adjudicación**

“ Que es deber del ESTADO ofrecer protección especial a las colectividades indígenas”, “Que estos grupos tendrán que ubicarse en las áreas establecidas como inadjudicables por el Decreto de Gabinete 123 de 8 de mayo de 1969 **en compensación** del área de la actual Reserva Indígena que será inundada.”

“Que la mudanza a nuevas áreas implica para los indígenas grandes esfuerzos acompañados de erogaciones económicas considerables, todo lo cual justifica, por razones de humanidad, las ayudas que el Estado acuerde a su favor.” determina un fondo especial para los grupos indígenas que habitan en la actual Reserva Indígena del Bayano.”³³

EL FONDO ESPECIAL DE COMPENSACION Y AYUDA estaba formado:

- a- “Por el 30% (treinta por ciento) del monto total de las aforos que han ingresado al Fondo Forestal a partir del 1 de enero de 1971, como resultado de permisos o concesiones otorgadas por el SERVICIO FORESTAL del Ministerio de Agricultura y Ganadería para la extracción de madera en el área de la actual Reserva Indígena del Bayano.

- b- El 30 % (treinta por ciento) del monto total de los aforos que ingresen al Fondo Forestal del Estado por razón de otorgamiento de permisos o concesiones por la extracción de madera en el área de la actual Reserva Indígena del Bayano, dentro de un plazo de **tres (3) años improrrogables** a partir de la fecha de la promulgación del presente Decreto de Gabinete.

³³ Decreto de Gabinete Numero 156 de 8 de Julio de 1971. <http://docs.panama.justia.com/federales/decretos-de-gabinete/decreto-de-gabinete-156-de-1971-jul-26-1971.pdf>

Es de rigor establecer que el pago de suma alguna estaba descrito temporalmente en la norma, ya que el componente de indemnización tenía dos términos de ejecución:

- a- Un primer término de pago, del producto de ingresos por **PERMISO DE CONCESION DE TALA DE ARBOLES** en el área de construcción de la represa desde el 1 de enero de 1971 a la fecha de promulgación de la ley o sea el 8 de julio de 1971, **promoviéndose la retroactividad de la norma, para beneficio financiero de las presuntas víctimas.**
- b- y El 30 % (treinta por ciento) del monto total de los aforos que ingresen al Fondo Forestal del Estado por razón de otorgamiento de permisos o concesiones por la extracción de madera en el área de la actual Reserva Indígena del Bayano, por un término de **TRES (3) AÑOS IMPRORRROGABLES.**

Es evidente que el **FONDO ESPECIAL DE COMPENSACION Y AYUDA** que surge a la vida jurídica en **Decreto de Gabinete Número 156 de 8 de Julio de 1971**, sólo tenía vigencia hasta el año **1974**, por lo cual estas compensaciones son anteriores a los acuerdos de **MAJECITO** (1975) y de **FARALLON** (1976) y **FUERTE CIMARRON** (1977), no obstante los derechos de compensación fueron otorgados y pagados por tres años como lo dispuso la norma. Y los acuerdos de Majecito (1975), Farallón (1976) y Fuerte Cimarrón (1977) constituyen nuevos acuerdos de ayuda y compensaciones adicionales, así vemos como a nivel de pagos en el Acuerdo de Majecito se estipuló :

- 1- Desarrollo de Programa de Construcción de viviendas y plan de producción, mediante contratos independientes siguiendo las siguientes cláusulas:

- a- **Se establecerá un salario de B/ 2.50**
- b- Se proveerá un subsidio alimenticio complementario.
- c- Se fijará un plazo para terminar el plan de vivienda y el plan de producción.

En relación al Acuerdo de Farallón se adquirió como compromiso financiero:

- 1- Se acelerará el pago de los árboles, frutales inundados, de los cuales ya se hizo inventario.

En relación al Acuerdo de Fuerte Cimarrón se destacaron las siguientes obligaciones:

- 1- La Corporación Bayano se compromete a reconocerle una suma de dinero a las comunidades indígenas por la extracción de madera. Este porcentaje será establecido teniendo en cuenta los intereses e inversiones de la Corporación Bayano y los intereses de los Indígenas. Los dirigentes Kunas de Alto Bayano designaran un representante para que coordine con la Dirección de Planificación y Finanzas de la Corporación el monto de esta suma.**
- 2- La Corporación Bayano y los representantes indígenas por mutuo acuerdo establecieron iniciar la extracción de madera de manera inmediata en el Área de Ipeti e Ibesigana, exceptuando las especies Espave y Cedro Amargo. **(Extracción 4 meses).**

De este acuerdo, se estableció la extracción de madera por un término de 4 meses, para beneficio de las presuntas víctimas, las cuales por conducto de sus **dirigentes Kunas de Alto Bayano designaron un representante para**

que coordinase con la Dirección de Planificación y Finanzas de la Corporación el cobro del monto, de estas sumas.

No se tiene conocimiento, por parte del ESTADO DE PANAMA, de obligaciones pendientes con las comunidades indígenas en referencia a estos acuerdos y la prolongación de beneficios por conductos de acuerdos posteriores no ha sido demostrado en este proceso, pues acuerdos posteriores no constan en los archivos presentados por las presuntas víctimas, ni han podido ser ubicados o individualizados en los archivos estatales pertinentes.

CUARTO: En cumplimiento del **ACUERDO DE MAJECITO**, el Estado de Panamá, “procedió al levantamiento de un censo de la población indígena Emberá que iba a ser afectada por el Proyecto Hidroeléctrico, ejecutado entre los meses de julio y agosto de 1973, dando como resultado 85 familias, de las cuales 25 de ellas se encontraban nucleadas en el poblado de MAJECITO”.³⁴

“De igual manera se procedió al inventario y avalúo de los bienes de las comunidades indígenas, para proceder a las compensaciones e indemnizaciones previamente concertadas en los acuerdos suscritos, determinándose la reubicación de estas familias en el Área de PARTI comprendida entre el Rio Aibir y el Piriati , teniendo como área limítrofe por el norte la Trocha de la Reserva Kuna y al sur la Carretera Interamericana,

³⁴ Antropólogo ANIBAL PASTOR NUÑEZ titulado “ DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REUBICACIÓN CHOCOE EN EL BAYANO” Pág. 63
bdigital.binal.ac.pa/loteria/descarga.php?f=1985_LNB/1985_350...

teniendo una extensión de dos mil seiscientos cuarenta hectáreas (2640 hectáreas) y otras fueron reubicadas en el Área de IPETI ubicada al Sur de la Carretera Interamericana, entre los ríos Ipeti y Urti con una extensión de dos mil novecientos cuarenta hectáreas (2940)”.³⁵

En ejecución del acuerdo de Majecito, se procedió a la construcción de viviendas en estas nuevas áreas, aceptadas por las comunidades trasladadas, dotándose a toda la comunidad de un subsidio alimenticio por un término de seis (6) meses, que se inicio el 25 de febrero de 1975. Se construyeron centros educativos y se fortalecieron los ya existentes, promoviendo programas de capacitación técnica a los Indígenas, además de la construcción de pozos, por conducto del Departamento de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud. **Y se procedió al pago de todas las sumas de dineros resultantes del pago por los cultivos y arboles frutales, pagos efectuados por flujos mensuales, por un período de nueve meses, además de proporcionar semillas, plántones con el objeto de promover una integración, efectiva al nuevo entorno material y que se contara con todas las garantías de salud, educación , seguridad e integración a las nuevas áreas ocupadas. (el subrayado es nuestro).**

De conformidad a estos testimonios históricos, descritos por el **PROFESOR ANIBAL PASTOR NUÑEZ**, se procedió a una ejecución ordenada y programática de cada una de las obligaciones del Estado en

³⁵ Antropólogo ANIBAL PASTOR NUÑEZ titulado “ **DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REUBICACIÓN CHOCHOE EN EL BAYANO**” Pág. 71
bdigital.binal.ac.pa/loteria/descarga.php?f=1985_LNB/1985_350...

cumplimiento de los acuerdos suscritos, incluidas las indemnizaciones pactadas.

Información referida a las indemnizaciones recibidas por los pueblos indígenas por razón de la construcción del embalse del Bayano, se publicó en la Revista LOTERIA Nos.350-351 Mayo Junio 1985, de pagina 61 a 76 en la cual se describe el procedimiento y las actividades generadas por el **ESTADO DE PANAMA** para dar cumplimiento a todas y cada una de sus obligaciones para con los Pueblos Indígenas Kuna y Emberá .³⁶

QUINTO: La pretensión de las presuntas víctimas, en **ESCRITO DE SOLICITUD DE ARGUMENTOS Y PRUEBAS** en la **PETICION INTERPUESTA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS** en razón de **CASO NUMERO 12.354** propuesto por **LOS PUEBLOS INDIGENAS KUNA DE MADUGANDI y EMBERA DE BAYANO Y SUS MIEMBROS. PANAMA.,** petición presentada ante la **COMISION**, no es la misma pretensión presentada el 11 de mayo de 2000, ante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o la CIDH”) por conducto de la International Human Rights Law Clinic of The Washington College of Law, el Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP), la Asociación Napguana y Emily Yozell, a favor de los pueblos INDIGENAS KUNA DE MADUGANDI y EMBERA DE BAYANO, contenidas en el Anexo 6 del referido informe³⁷.

³⁶ Revista Lotería Nos.350-351 Mayo Junio 1985, de página 61 a 76.Desarrollo del Programa de reubicación Chocoe en el Bayano: Traslado de Majecito.

³⁷ Argumento 1 del Informe de Fondo Número 125/12 Caso 12.354 y Anexo 6

En relación al Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas de las presuntas víctimas , en el caso Pueblos Indígenas Kuna de Madugandi y Emberá de Bayano y sus miembros (Caso Numero 12.354) se formula **una nueva** pretensión pecuniaria dividida de la siguiente manera:

Indemnización de la COMARCA KUNA MADUGANDI, según esta nueva pretensión se desglosa de la siguiente manera:

A- INDEMNIZACION.....	\$ 8,920,584.20
B- DAÑOS ECOLOGICOS.....	\$13,000,000.00
C- DAÑOS A LAS VIOLACIONES DE LOS DH.....	\$29,150,210.58
D- COSTOS ADMINISTRATIVOS.....	\$ 662,000.00

GRAN TOTAL \$51,732,794.80³⁸

Por su parte la comunidad Indígena EMBERA formula sus pretensiones pecuniarias de la siguiente manera:

1) UNIÓN EMBERÁ.

Pérdida por animales y cultivos	\$ 2,000,000.00
Sitios sagrados.....	\$ 50,000.00
Recursos naturales y maderables.....	\$1,000,000.00
Vivienda.....	\$ 100,000.00

³⁸ Anexo 1 de Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas de las presuntas víctimas , en relación al caso Pueblos Indígenas Kuna de Madugandi y Emberá de Bayano y sus miembros (Caso Numero 12.354)

2)MAJE CORDILLERA

Pérdida por animales y cultivos	\$2,000,000.00
Sitios sagrados.....	\$ 50,000.00
Recursos naturales y maderables.....	\$1,000,000.00
Vivienda.....	\$ 100,000.00

3)PIRIATÍ EMBERÁ

Pérdida por animales y cultivos	\$6,500,000.00
Sitios sagrados.....	\$ 100,000.00
Recursos naturales y maderables.....	\$2,000,000.00
Vivienda.....	\$ 100,000.00
Costos sufragados por comunidades.....	\$1,200,000.00
Costo del proceso	\$2,100,000.00

4)IPETÍ EMBERÁ:

Pérdida por animales y cultivos	\$4,338,950.00
Sitios sagrados.....	\$ 100,000.00
Recursos naturales y maderables.....	\$2,500,000.00
Vivienda.....	\$ 175,000.00

GRAN TOTAL \$22,213,950.00³⁹

De lo expuesto en los cálculos aportados en este escrito de Argumentos, la cifra reclamada por las presuntas víctimas es de **SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS**

³⁹ Anexo 1.1 de Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas de las presuntas víctimas , en relación al caso Pueblos Indígenas Kuna de Madugandi y Emberá de Bayano y sus miembros (Caso Numero 12.354)

CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON OCHENTA CENTAVOS. (\$ 73,946,744.80).

La CORTE puede apreciar, que **LOS PUEBLOS INDIGENAS KUNA DE MADUGANDI y EMBERA DE BAYANO Y SUS MIEMBROS. PANAMA**, reclamaban en su original petición la suma de **\$58,382,526.81 (cincuenta y ocho millones trescientos ochenta y dos mil quinientos veintiséis dólares con ochenta y un centavos)**, de esto se deduce la existencia de un incremento de la solicitud de los supuestos daños en una suma de **\$15,564,217.99 (QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE DOLARES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS.)** o que se trata de una nueva reclamación distinta a la formulada de manera inicial y que dio contenido al Caso 12.354.

Puede fácilmente observar la Honorable **CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA HONORABLE COMISION** que en el “COMPONENTE DE INDEMNIZACION” contenido en el INFORME SOCIO ECONOMICO SOBRE LA INDEMNIZACION E INVERSION DE LA COMARCA KUNA DE MADUGANDI Y DE LAS TIERRAS COLECTIVAS EMBERA PIRIATI Y MAJE CORDILLERA.”, previamente presentado a favor de las presuntas víctimas , el número de presuntos afectados son disimiles, a los que por este conducto se presentan como nuevos reclamantes de tal manera que en la presente Solicitud se tienen los siguientes números de supuestas víctimas :

PRESUNTAS VICTIMAS EMBERA WOUNAN DE CONFORMIDAD A COMPONENTE DE INDEMNIZACION” en el INFORME SOCIO ECONOMICO SOBRE LA INDEMNIZACION E INVERSION.⁴⁰

Comunidad	Presuntas Víctimas Mal Indemnizadas.
IPETI EMBERA	15
PIRIATI EMBERA	27
Comunidad	No indemnizados
IPETI EMBERA	1
PIRIATI EMBERA	13

Reclamo AÑO 2000

TOTAL 56

No obstante advertimos que en el ESCRITO DE SOLICITUDES ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS , en relación al caso Pueblos Indígenas Kuna de Madugandi y Emberá de Bayano y sus miembros (Caso Numero 12.354) se refleja la siguiente información:

Comunidad

Presuntas Víctimas

⁴⁰ ANEXO 6 del Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.....

IPETI EMBERA	133
PIRIATI EMBERA	111
Reclamo año 201	TOTAL..... 244

Resulta que en este Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas de las presuntas víctimas , en relación al caso Pueblos Indígenas Kuna de Madugandi y Emberá de Bayano y sus miembros, se trata de una reclamación distinta, de personas distintas, en número y cuantía disímil, a la que ha sido notificado el **ESTADO DE PANAMA** y que se desprende de la **PETICION INTERPUESTA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS** en razón de **CASO NUMERO 12.354** propuesto por **LOS PUEBLOS INDIGENAS KUNA DE MADUGANDI y EMBERA DE BAYANO Y SUS MIEMBROS. PANAMA.,** petición presentada ante la **COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS** el 11 de mayo del año 2000 Y SU INFORME APROBADO EN SESION N° 1924 celebrada el día 13 de noviembre de 2012 y que **SE SOMETE A CONSIDERACION DE LA CORTE .**

Resulta que la Comunidad IPETI EMBERA inicialmente presento reclamo para 16 personas y luego presentan reclamo para 133 personas, en tanto que para la comunidad PIRIATI EMBERA reclamaba indemnización para 40 presuntas victimas y en esta oportunidad se señalan como posibles

afectados, la cantidad de **111** presuntas víctimas, lo que deviene en una diferencia de 56 a 244 presuntas **víctimas**.

Por su parte en el Cuadro General de Indemnizaciones y Violaciones los Derechos Humanos de los Kunas de la Comarca de Madugandi, presentado en el Escrito de las presuntas víctimas, no determinan el número de personas reclamantes, no obstante el monto de la presunta indemnización solicitada difiere de la solicitud original ya que en el informe COMPONENTE DE INDEMNIZACION” del INFORME SOCIO ECONOMICO SOBRE LA INDEMNIZACION E INVERSION, presentado por la COMISION en atención a reclamación de las presuntas se estimó en **\$58,382,526.81** incluyendo a los pueblos **EMBERA WOUNAN** y en esta oportunidad la sola **Comunidad Kuna**, reclama \$51,732,794.80, resultando en un monto distinto a las reclamaciones presentadas por la **COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS** en su Informe ante la **CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**.

Por otro lado en información adicional del Caso, prestada por **EL ESTADO DE PANAMA** con fecha Julio de 2001, se hace referencia a pagos de Informe prestado por el Director General de Desarrollo Integral del Bayano, al **Teniente Coronel LEONIDAS MACIAS**, sobre pagos efectuados entre 1974 a 1978 a las comunidades indígenas reclamantes, mediante Nota No. 216 D.G. –CB de 29 de octubre de 1984, en el cual se hacia constar la entrega de la suma de **UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOLARES (\$1,372,000.00)** a las comunidades de MAJE, PINTUPO, AGUAS CLARAS, RIO DIABLO, SADERHUILA, IBEBSIGANA, IPETI,

POR INDEMNIZACIÓN MONETARIA DIRECTA Y PAGO DE VIVIENDA.⁴¹

Por lo expuesto nos Oponemos a la Primera Declaración solicitada en Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas de las presuntas víctimas , en relación al caso Pueblos Indígenas Kuna de Madugandi y Emberá de Bayano y sus miembros (Caso Numero 12.354) y Solicitamos que la misma sea rechazada en todo su contexto por no adeudarse ninguna suma en concepto de supuesta indemnización dejadas de pagar a favor de los PUEBLOS INDIGENAS KUNAS Y EMBERAS.

⁴¹ ANEXO 1 DE EXCEPCIONES del ESTADO, que corresponde, a las paginas 127 a 137 contenidas en Archivo 7.12.354 Expediente 1 de la información electrónica brindada por la COMISION. Nota de fecha 9 de julio de 2001, dirigida al Doctor JORGE E. TAINA Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CONTESTACION A LA SEGUNDA DECLARACION SOLICITADA POR LA REPRESENTACIÓN DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS DE LAS COMUNIDADES KUNA DE MADUGANDI Y EMBERAS DE ALTO BAYANO.

“El Estado de Panamá violó el derecho a la propiedad consagrado en el Artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del pueblo Emberá del Bayano y sus miembros, por no haberles provisto acceso efectivo a un título de propiedad colectiva sobre sus territorios; así como por haberse abstenido de delimitar, demarcar y proteger efectivamente sus territorios.”

Las presuntas víctimas señalan como argumento a esta solicitud.

“La falta de reconocimiento de la titulación, demarcación y titulación de las tierras otorgadas a los Emberá de Alto Bayano.”

Nos oponemos a la presente declaración solicitada por las presuntas víctimas por no ser cierta, ya que el **ESTADO DE PANAMA**, ha provisto acceso efectivo a títulos de propiedad colectiva sobre sus territorios y se delimitó, demarcó y se ha brindado protección a sus territorios, otorgando títulos de propiedad colectiva a los indígenas en la Republica de Panamá.

NOS OPONEMOS A LA SEGUNDA DECLARACIÓN SOLICITADA POR NO SER CIERTA, CON FUNDAMENTO EN LAS SIGUIENTES RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO:

PRIMERO: La COMARCA EMBERA WOUNAN fue creada por ley 22 del 8 de noviembre de 1983 y mediante Decreto Ejecutivo Numero 84 del 9 de abril de 1999, se adopta la Carta Orgánica Administrativa de la Comarca, considerando 65 del Informe Numero 125/12 Caso 12.354 , 13 de noviembre de 2012 ⁴². Esta tácita aceptación de la demarcación y protección de las tierras EMBERA WOUNAN, mediante la creación de la Comarca, se contradice con la solicitud primaria de los Peticionarios, que alegan falta de reconocimiento a las tierras ocupadas por los indígenas EMBERAS y en especial de aquellos grupos que abandonando sus grupos primarios constituyen otros asentamientos, solicitando la propiedad de las tierras de sus nuevos asentamientos, que responsablemente el ESTADO ha atendido, creando nuevas leyes, decretos que las reglamentan, demarcando dichas tierras en Alto Bayano y adelantando los mecanismos legales, para dichas adjudicaciones, previo cumplimientos de los requisitos de la Ley.

El PROYECTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL DARIEN , con el concurso de la **DIRECCION NACIONAL DE POLÍTICA INDIGENISTA**, hoy **VICEMINISTERIO DE ASUNTOS INDIGENAS**, (aprobado mediante Ley 64 de 20 de Septiembre de 2013, debidamente

⁴² Considerando 45 del Informe de Fondo No. 125/12 Caso 12.354 Pueblo Indígena Kuna de Madugandi y Emberá de Bayano y sus miembros.

promulgado mediante Gaceta Oficial 27378)⁴³ adscrito al MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, en el año 2004 delimitó, los polígonos de los territorios **KUNA DE MADUGANDI Y EMBERA CHOCOE**, con lo cual se demuestra de manera fehaciente la falta de razón en la solicitud de los solicitantes al señalar que no se han delimitado y demarcado sus territorios de propiedad colectiva.⁴⁴

SEGUNDO: La Ley 72 de 23 de diciembre de 2008, establece un procedimiento especial para el reconocimiento de la propiedad colectiva de **GRUPOS INDÍGENAS QUE SE ENCUENTREN FUERA DE SUS COMARCAS**. Dicha ley ha sido reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo 223 de 29 de julio de 2010. Es necesario determinar que en efecto las colectividades indígenas, cuentan con toda una normatividad Constitucional y Legal que protege sus territorios ancestrales y que les otorga **propiedad con limitación de no venderlas, ni arrendarlas**.

Es necesario recordar que todas estas tierras, están protegidas Mediante la Ley 18 de 8 de noviembre de 1934 sobre **RESERVAS INDIGENAS** en la cual se da tratamiento a los territorios originarios, protegiendo la Región Indígena de Alto Bayano.⁴⁵ Esta Ley de manera clara, establecía que las tierras demarcadas en el Plano con número de orden B 6-442 realizado por el Agrimensor oficial BLAS HUMBERTO DANIELLO y que consta en el Archivo de la Secretaria de Instrucción Pública, sería RESERVA INDÍGENA

⁴³ Gaceta Oficial 27378 publicada el 20-9-2013.

⁴⁴ EVALUACIÓN EXTERNA FINAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE DARIEN (2011)pág. 17. Anexo 1 DEL ESTADO en la Contestación a Informe de Fondo de la COMISION.

⁴⁵ Ley 18 de 1934 <http://docs.panama.justia.com/federales/leyes/18-de-1934-nov-13-1934.pdf>

y poseídas en común por las tribus aborígenes que las habitan y no podrán ser enajenadas, ni arrendadas. (CUNAS y EMBERAS).

Es evidente, que **EL ESTADO DE PANAMA**, desde 1934 ya brindó protección a los indígenas EMBERA WOUNNAN DE ALTO BAYANO, y CUNAS DE MADUGANDI demarcó sus territorios, les otorgó mediante ley un título colectivo, a todas las tribus originarias que habitaban ALTO BAYANO, a saber CUNAS y EMBERAS.

Las RESERVAS territorios protegidos por ley, destinado para uso colectivo de pueblos indígenas es un concepto y una realidad jurídica que ha brindado protección a los pueblos indígenas, básicamente con un criterio eminentemente de protección ecológica y respeto de las culturas originarias de esos territorios , no obstante el concepto de propiedad, de tenencia del territorio, requiere de elementos o instrumentos legales más tangibles, los pueblos Indígenas Históricamente, han requerido ir delimitando sus tierras por grupos indígenas, así han solicitado la creación de sus COMARCAS, la EMBERA y la COMARCA CUNA DE MADUGANDI. Los indígenas Cunas y Emberás, tenían conflictos en el manejo de los territorios comunes, constituidos en RESERVA y por ende el ESTADO, creo las COMARCAS, en tiempos primarios de la Historia Patria, para delimitar y evitar conflictos entre grupos indígenas.

No obstante, tener territorios delimitados, demarcados y protegidos, los pueblos indígenas emigran a otros territorios y EL ESTADO DE PANAMA en un respeto absoluto y en la necesidad de garantizar el derecho a la propiedad de esos grupos, adicionalmente a las regiones protegidas, ha

implementado la Ley de Propiedad Colectiva, para dar atención a todos aquellos grupos indígenas que abandonan las Comarcas y Reservas y se asientan en otros territorios distintos, por lo cual con la promulgación de la Ley 72 de 23 de diciembre de 2008 y su reglamentación mediante el Decreto Ejecutivo 223 de 29 de julio de 2010 y el efectivo otorgamiento de Títulos de propiedad colectiva, ilustran la inexistencia de la violación de Derechos Humanos que por conducto de esta Solicitud se pretende declarar.

TERCERO: Mediante RESOLUCION ADMG DE 2012 de 8 de febrero, se modifica la Resolución ADMG -058- 2011 de 1 de diciembre de 2011, que ordena suspender todas las solicitudes de adjudicación de títulos privados, presentadas ante la Dirección Nacional de Titulación, hasta la definición de las condiciones de adjudicabilidad de la Zona con base en la Ley 72 de 23 de diciembre de 2008. Esta Resolución, en sus CONSIDERANDOS señala en su ordinal Tercero: “ **En virtud de solicitud y acuerdos suscrito entre el Administrador General de Autoridad Nacional de Tierras y la Dirigencia Indígena de tierras colectivas de los PUEBLOS EMBERA Y WOUNAN, de DARIEN, PANAMÁ Y COLON.”**

Es necesario un estudio detallado de la referida Resolución, ya que ella lo que suspende tal como lo señala de manera literal la Resolución, son :

“las solicitudes de derecho posesorio y adjudicación de títulos privados presentadas ante la Dirección Nacional de Titulación y Regularización, las cuales mantienen proceso de adjudicación de

titulo colectivo con base a la Ley 72 de 23 de Diciembre de 2008 y el Decreto Ejecutivo Número 223 de 29 de junio de 2010”. **(El subrayado y negritas son nuestros)**

Se refiere de manera especial esta suspensión **a la solicitud de los Colonos**, sobre tierras que mantienen solicitud de propiedad colectiva y así lo ha ratificado el **ADMINISTRADOR GENERAL ENCARGADO DE LA ANATI**, en prueba presentada de manera extemporánea por las presuntas víctimas y no tachada por el **ESTADO**, pues ya fue incorporada previamente, en la cual de manera taxativa en esta Certificación de fecha 12 de marzo de 2012 se señala:

“Esta suspensión es en las siguientes áreas:

- a) **ALTO BAYANO:** Piriati Emberá, Ipeti Emberá, Maje Emberá Drua (Maje Cordillera y Unión Emberá) .

Que el Proceso de Titulación Colectiva, en el Área de Alto Bayano: Piriati Emberá, Ipeti Emberá, Maje Emberá Drua (Maje Cordillera y Unión Emberá) **se encuentra en revisión para continuar con el debido tramites respectivo a la adjudicación colectiva.**” (El subrayado es nuestro).

De esta certificación, que las presuntas víctimas han pretendido utilizar , como supuesta prueba de la suspensión de la adjudicación de TITULO COLECTIVO, por parte del Estado de Panamá a sus pretensiones, se deduce de manera inequívoca y no escapará al ilustre criterio de la **CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS**, la inexistencia de los supuestos actos de violación al **derecho a la propiedad consagrado en el Artículo 21 de la Convención Americana sobre**

Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio del pueblo Emberá del Bayano y sus miembros, por no haberles provisto acceso efectivo a un título de propiedad colectiva sobre sus territorios; así como por haberse abstenido de delimitar, demarcar y proteger efectivamente sus territorios.”, ya que dicha suspensión no opera con respecto a las propiedades colectivas de los pueblos indígenas, sino con aquellas solicitudes de títulos privados, afectos a las solicitudes en tierras solicitadas como de **propiedad colectiva**.

CUARTO: Consta en el expediente contentivo de la Solicitud presentada por la COMISION , solicitud del “ CONGRESO GENERAL DE TIERRAS COLECTIVAS EMBERA ALTO DEL BAYANO” en la cual en efecto se solicita al sustanciador de Reforma Agraria Regional de Chepo, la suspensión de solicitudes privadas de tierras de uso colectivo de la población Emberá de Alto Bayano, por lo cual no es atendible la supuesta violación de los derechos humanos, que por este medio se acusa.⁴⁶

Consta en el expediente de igual manera Nota ANATI/AG/0163 de **fecha 26 de enero de 2011**, dirigida al Cacique General de Alto Bayano, BOLIVAR JARIPIO, en la cual el **Licenciado ALEJANDRO M. CASTILLERO P.** Administrador General de la **AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS (ANATI)** señala:

“Acusamos recibo de la solicitud remitida a nuestro despacho con el propósito de **iniciar el tramite para la adjudicación de títulos de**

⁴⁶ Acuerdo de Piriati EMBERA 8 de febrero de 2012.

propiedad colectiva de tierras conforme lo establecido en la Ley 72 de 8 de diciembre de 2008.”(el subrayado es nuestro)⁴⁷

Es atendible como prueba, que en efecto, la solicitud de adjudicación de las tierras colectivas de las comunidades EMBERA WOUNAN de Alto Bayano, no se formalizaron sino hasta el 26 de enero de 2011, mismas que están en tramite y que requieren completar una serie de requisitos de carácter administrativo, que es menester promover para concluir a satisfacción tales solicitudes, conforme a la ley y en cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes.

QUINTO: EL ESTADO DE PANAMA ha brindado protección a los territorios indígenas, ya que consta en el expediente contentivo de las diligencias realizadas por LA COMISION de las actividades realizadas por las autoridades panameñas en protección de las tierras colectivas y de las tierras comarcales, no obstante, es dable destacar el complejo escenario de las situaciones que se dan en estas áreas y quisiéramos destacar la actividad jurídica realizada por la Autoridad Nacional del Ambiente quien con fecha 31 de Enero de 2007 remite nota ARAPE N 01-095-07, a la Policía Técnica Judicial dando informe en referencia a lugares en los cuales se produjeron “zocuelas” (tumbes de montes), en el sector Torti Abajo Comarca de Madugandi, este mismo funcionario cursa Nota ARAPE-01-496-07 con fecha 19 de abril de 2007 dirigida al Fiscal Undécimo del Circuito Judicial de Panamá en donde se remite informe de inspección Numero 006-2007 .

⁴⁷ Nota de fecha 26 de enero 2011. 14. 12.354 Kuna expediente 8 pdf. Pág. 27

De igual manera se remite nota ARAPE NUMERO 01-544-07 suscrita por el administrador Regional ANAM-PANAMA ESTE con fecha 23 de abril de 2007 dirigida al Viceministro de Gobierno y Justicia, en el cual se informa de manera literal:

“ Las áreas correspondientes a IPETI KUNA E IPETI EMBERA mantienen un contrato de alquiler por 12 años de tierras, para ceba de ganado con el Sr. HERNAN DELGADO, el cual mantiene casas y corrales de las tierras correspondientes dentro de la comarca Kuna e Ipeti Emberá”

Los llamados colonos, son inmigrantes del interior de la República, grupos que igual que los indígenas, en busca de mejores asentamientos salen de sus tierras originales y emigran a otras, por lo general procedentes de las Provincias de Chiriquí, Veraguas, Los Santos y Coclé, quienes de igual manera reclaman al ESTADO se reivindiquen sus derechos de propiedad luego de asentarse y levantar sus familias en los nuevos territorios.

Es frecuente observar, tal como lo ilustra el informe de la Autoridad Nacional del Ambiente previamente citado, que los propietarios colectivos, arriendan las referidas tierras colectivas, para luego someter al juicio de las autoridades la actividad de afectación al entorno de la biodiversidad del área, lo que se constituye en un grave problema social, humano, político y socio económico que involucra supremos esfuerzos del **ESTADO DE PANAMA** en la administración de un problema de manejo de suelos, inadjudicables, inarrendables, pero que de manera reiterada, viola la ley quienes autorizan tales actos, promoviendo de alguna manera las

migraciones de colonos, la afectación al medio ambiente y dejan sin sentido los postulados para los cuales la ley fue promulgada.

Por lo expuesto nos Oponemos a la Segunda Declaración solicitada en Escrito de Solicitudes Argumentos y Pruebas de las presuntas víctimas , en relación al caso Pueblos Indígenas Kuna de Madugandi y Emberá de Bayano y sus miembros (Caso Numero 12.354) y Solicitamos que la misma sea rechazada en todo su contexto ya que el **ESTADO DE PANAMA HA PROVISTO acceso efectivo a los títulos de propiedad colectiva sobre LOS TERRITORIOS INDIGENAS FUERA DE LAS COMARCAS; y en efecto ha delimitado, demarcado y protegido efectivamente sus territorios.**”

CONTESTACION A LA TERCERA DECLARACION SOLICITADA POR LA REPRESENTACIÓN DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS DE LAS COMUNIDADES GUNA DE MADUGANDI Y EMBERAS DE ALTO BAYANO.

“El Estado de Panamá violó el derecho a la propiedad consagrado en el Artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma en perjuicio del pueblo indígena Kuna de Madugandi y sus miembros al haberse abstenido de realizar prontamente el reconocimiento, delimitación y demarcación , así como de brindar protección efectiva de los territorios de la Comarca Kuna de Madugandi frente a Terceros.”

Las presuntas víctimas señalan como argumento a esta solicitud.

“La falta de reconocimiento de la titulación y demarcación de las tierras de la Comarca Kuna de Madugandi por un periodo **comprendido dentro de la competencia temporal de la Corte** ”

Nos oponemos a la presente declaración solicitada por las presuntas víctimas por no ser cierta, ya que el ESTADO DE PANAMA, ha provisto acceso efectivo a títulos de propiedad colectiva y a delimitado, demarcado y protegido sus territorios, otorgando títulos de propiedad colectiva a los indígenas en la República de Panamá, de igual manera se ha demarcado, establecido y legalizado la Comarca Kuna de Madugandi y se le ha prestado atención y protección a los territorios comarcales.

NOS OPONEMOS A LA TERCERA DECLARACIÓN SOLICITADA POR NO SER CIERTA, CON FUNDAMENTO EN LAS SIGUIENTES RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO:

PRIMERO: Mediante Ley 24 de 12 de enero de 1996, las presuntas víctimas obtienen el reconocimiento legislativo por la cual **“SE CREA LA COMARCA CUNA DE MADUGANDI”** , en la cual se establecen los límites de la referida comarca y se estatuye que dichas tierras, “son de propiedad colectiva de la Comarca Cuna de Madugandi”, su tenencia, conservación y uso, se reglamentará de acuerdo con la Constitución Política, las leyes nacionales vigentes y las disposiciones de esta ley. Se instituye la Comarca como una división política especial , reconociendo como máxima autoridad tradicional, organismo de expresión y decisión de la Comarca. Kuna

de MADUGANDI, al **Congreso General**.⁴⁸

SEGUNDO: La demarcación y reconocimiento legislativo de la COMARCA DE MADUGANDI se dio cinco (5) años antes de la interposición de las peticiones que obran en la presente contestación del ESTADO DE PANAMA y han transcurrido diecisiete (17) años a la presente fecha, en que se pretende DECLARAR que EL ESTADO PANAMEÑO se ha **abstenido de realizar prontamente el reconocimiento, delimitación y demarcación de las tierras del pueblo indígena de MADUGANDI**.⁴⁹

Es interesante, el replanteamiento de la violación formulada por las presuntas Víctimas, que en esta ocasión señalan que :

- “2- La falta de reconocimiento, titulación y demarcación de las tierras de la Comarca Kuna de Madugandi **por un período de tiempo comprendido dentro de la competencia temporal de la Corte.**” (lo subrayado y en negrita es nuestro)⁵⁰

con lo cual reconocen la falta de Competencia Parcial (Ratio Tempori) de la Corte Internacional de Justicia, para conocer de sus supuestos reclamos, ya que EL ESTADO DE PANAMA , ratificó la CONVENCIÓN

⁴⁸ Ley 24 de 12 de enero de 1996, por la cual “SE CREA LA COMARCA CUNA DE MADUGANDI”

http://www.organojudicial.gob.pa/cendoj/wpcontent/blogs.dir/cendoj/PUEBLOS_INDIGENAS/ley_24_1996_kuna_madugandi.pdf

⁴⁹ Ver INFORME DE FONDO COMISION No. 125/12 , Considerando 1, pág. 1 Resumen.

⁵⁰ Pág.4 del escrito de Solicitudes, argumentos y pruebas de las presuntas victimas, en relación con el caso Pueblos Indígenas Kuna de Madugandi y Emberá de Bayano y sus miembros. (No. 12.354)

AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, el 5 de junio de 1978 y el 9 de mayo de 1990, presentó instrumento fechado el 29 de febrero de 1990, mediante el cual declara que **RECONOCE COMO OBLIGATORIA DE PLENO DERECHO LA COMPETENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS** sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.⁵¹

Este reconocimiento expreso, POR PARTE DE LOS PETICIONARIOS Y PRESUNTAS VICTIMAS, da validez a nuestra Excepción de Falta de Competencia (Ratio Tempori) que formulamos al Contestar las Solicitudes y recomendaciones formuladas por la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y que en esta Ocasión Ratificamos y hacemos valer.

La representación legal de las presuntas Víctimas, en su demanda, formula su petición para que la CORTE considere , **“la falta de reconocimiento, titulación y demarcación de las tierras de la Comarca Kuna de Madugandi, por un período de tiempo comprendido dentro de la competencia temporal de la Corte.”** No obstante con la promulgación de la Ley 24 de 12 de enero de 1996, fecha en la cual se obtiene el reconocimiento legislativo por la cual **“SE CREA LA COMARCA CUNA DE MADUGANDI”** , que reconoce, titula y demarca las tierras de la Comarca Kuna de Madugandi, sugiere que esta solicitud es Temeraria y carente de sentido formal, ya que la interposición

⁵¹ <http://www.cidh.oas.org/Basicos/basicos3.htm> . COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

de la Demanda de Solicitudes es del año 2000, fecha en la cual ya había sido reconocido su derecho comarcal, aunque previamente ya tenían sus derechos garantizados, por la Ley de Reserva Indígena de Alto Bayano.

La referencia de la competencia temporal de la Corte, señalada por los peticionarios, asumimos, que resulta de que reconocen las presuntas víctimas, que en efecto no hay competencia de la CORTE INTERAMERICANA, sino desde **29 de febrero de 1990**, fecha en la cual el ESTADO DE PANAMA, declara que RECONOCE COMO OBLIGATORIA DE PLENO DERECHO LA COMPETENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

TERCERO: EL ESTADO DE PANAMA, ha brindado debida protección a los territorios del Pueblo Indígena de Madugandi, pues estos cuentan con los mecanismos legales suficientes, necesarios y apropiados, para la defensa de sus derechos, dentro del marco del debido proceso y de acuerdo a las normas generales del derecho privado, social, ambiental y en el escenario de los Derechos Humanos, teniendo amplia gama de disposición de derechos para hacer valer lo que pretenden sea el Derecho y la Justicia reclamada.

La Fiscal Superior de Asuntos Internacionales de la República de Panamá, Licenciada GRETA MARCHOSKY DE TURNER, oficina adscrita a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DEL

ESTADO DE PANAMA, ante solicitud formulada en referencia a procesos instruidos ante el Ministerio Público por miembros de las comunidades indígenas MADUGANDI, EMBERA WOUNAN, IPETI EMBERA, PIRIA, ICANDI, PIRIATI Y MAJE CORDILLERA se señala que la Fiscalía Quinta del Circuito Judicial de Panamá , Fiscalía Especializada en esta clase de investigaciones penales, señala que se han instruido los siguientes procesos:

- 1- Sumario en averiguación, delito contra los Recursos Naturales (tala de arboles cerca del Rio Bayano) denunciado por el Licenciado Rafael Rodríguez, de fecha 26 de junio de 2007. El Juez de conocimiento se inhibe del conocimiento del mismo y lo remite a la Corregiduría de Chepo.
- 2- Sumario en contra de ABREGO PASCUAL, por supuesto delito Ecológico, denunciado por el Licenciado **HECTOR HUERTAS**, en representación de la Comarca Kuna de Madugandi, de fecha 30 de enero de 2007. Radicado en el Juzgado Décimo del Circuito Penal de Panamá.
- 3- Sumario seguido a Ebello Pérez, por un presunto Delito Contra el ambiente y el ordenamiento territorial, hecho iniciado de Oficio, de fecha 14 de enero de 2010. Radicado en el Juzgado Tercero Municipal de Panamá.
- 4- Sumario en Averiguación por un presunto delito Contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, denunciado por el Licenciado HECTOR HUERTAS en representación de la Comarca Kuna Yala, de fecha 18 de agosto de 2010. Fue remitido a través de Providencia de Nivel Interno a la Procuraduría General de la Nación.

- 5- Sumario seguido a Horacio Reyes Gaitán, por un presunto delito Contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial (tala dentro de la reserva hidrológica de Maje), hecho iniciado de oficio, de fecha 27 de mayo de 2010. Radicado en el Juzgado Décimo del Circuito Penal de Panamá.
- 6- Sumario en Averiguación por un presunto delito Contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, denunciado por el Licenciado HECTOR HUERTAS en representación de la Comarca Kuna de Madugandi, de fecha 27 de junio de 2012, fue remitido por el Juez Primero Municipal de Panamá, Ramo Penal, a la Personería de Chepo para que se investigue por el presunto delito de daños y usurpación.
- 7- Sumario seguido a Ramón Chocho y otros por el Delito contra la Seguridad Colectiva en perjuicio de Samuel Delgado y familia, de fecha 25 de noviembre de 2011. Radicado en el Juzgado Octavo Penal de Circuito de Panamá.
- 8- Sumario en averiguación por un presunto delito Contra los Recursos Naturales, denunciado por el Licenciado ALFREDO GONZALEZ JIMENEZ en representación de la Comunidad Ipeti Kuna, de fecha 3 de abril de 2013. Actualmente se mantiene en tramite en esta Fiscalía.
- 9- Sumario en averiguación por un presunto Delito contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, denunciado por Tito Jiménez, en representación de la Comarca Kuna de Madugandi, de fecha 6 de junio de 2013. Actualmente se mantiene en tramite en esta Fiscalía.
- 10- Sumario en averiguación por un presunto Delito contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, denunciado por

DIOGRACIO PUCHICAMA PEÑA, de fecha 19 de marzo de 2011. Radicado en el Juzgado Noveno de Circuito Penal de Panamá.

- 11- Sumario seguido a ERMY DOMINGUEZ MENDOZA, por presunto delito contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, iniciado de oficio, para la fecha 22 de junio de 2010. Radicado en el Juzgado Noveno de Circuito Penal de Panamá.⁵²

Es necesario mencionar que cada uno de estos procesos se desarrolla dentro del marco del debido proceder legal, de conformidad a las normas procesales, penales y administrativas referidas a la protección del Ambiente y de la Integridad territorial de las áreas protegidas. Es necesario además que de conformidad al debido proceso se han de desarrollar todas las instancias referidas al contradictorio, con cada uno de sus términos y desarrollo procesal de conformidad con la ley vigente de la República de Panamá, en la cual en la ponderación de los hechos, en referencia a las pruebas aportadas, se han de definir los criterios en la disputa de los derechos reclamados.

El ESTADO DE PANAMA, como Estado de Derecho ha de velar por el respeto de los Derechos Humanos de todos los nacionales y extranjeros dentro del territorio nacional, por ende no es dable aceptar que se sugiera que no se protegen los derechos humanos y se viola, **el Artículo 21 de la**

⁵² Nota de fecha 19 de septiembre de 2013, FSAI-2264-13 suscrita por la LICENCIADA GRETA MARCHOSKY DE TURNER, FISCAL SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma en perjuicio del pueblo indígena Kuna de Madugandi y sus miembros al haberse abstenido de realizar prontamente el reconocimiento, delimitación y demarcación , así como de brindar protección efectiva de los territorios de la Comarca Kuna de Madugandi frente a Terceros.”

QUINTO: EN el Informe de Fondo Numero 125/12, Caso 12.354 de los Pueblos Indígenas Kuna de Madugandi y Emberá de Bayano y sus miembros Panamá, de fecha 13 de noviembre de 2012, presentado a la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS por la COMISION, en su ordinal 2. se señala:

“Con relación al Pueblo Indígena Cuna de Madugandi informaron que si bien el Estado reconoció formalmente en 1996 el derecho a la propiedad colectiva sobre las tierras que habitan....”

De igual manera en el ordinal 22 se señala:

“En cuanto al reconocimiento de su derecho a la propiedad colectiva indicaron que mediante Ley Número 24 , adoptada el 12 de enero de 1996, fue creada la Comarca Kuna de Madugandi.”⁵³

En este orden de ideas, resulta por demás , explícita la ineficacia e improcedencia de la solicitud formulada por la COMISION y por la presuntas Víctimas en relación a la Violación del Artículo **21 de la**

⁵³ Informe de Fondo Numero 125/12, Caso 12.354 de los Pueblos Indígenas Kuna de Madugandi y Emberá de Bayano y sus miembros Panamá Ordinal 2 y 22.

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma en perjuicio del pueblo indígena Kuna de Madugandi y sus miembros al haberse abstenido de realizar prontamente el reconocimiento, delimitación y demarcación de sus tierras.”

Tal solicitud, previa aceptación de la inexistencia de los hechos acusados, es una violación a los principios primarios de la lealtad procesal, que como requisito primario debe sostener la aceptación de los hechos alegados como ciertos, sin que, la misma entidad o presunta víctima pueda utilizar como no ciertos, lo obvio y previamente aceptado, para formular cargos, pretendiendo la declaratoria de una violación a los Derechos Humanos, sobre un hecho inexistente.

Tal proceder, debe por parte de la CorteIDH, ser comentado de manera especial, pues la trascendencia de las solicitudes, el impacto socio político de los fallos, las consecuencias legales, sociales, políticas y económicas de cada proceso, la afectación de grupos sociales diversos, deben partir de hechos ciertos y de una solicitud formulada de BUENA FE, y no de solicitudes aleatorias, sin contenido, especulativas y premunidas de un contenido incierto, que atenta contra los Derechos Institucionales del ESTADO DE PANAMA y con el respeto que debe todo profesional, incluso el más humilde de los requirentes de Justicia, el respeto al ESTRADO del Tribunal, ante el cual se deban debatir, solo los reclamos justos y los hechos ciertos.

CONTESTACION A LA CUARTA DECLARACION SOLICITADA POR LA REPRESENTACIÓN DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS DE LAS COMUNIDADES KUNA DE MADUGANDI Y EMBERAS DE ALTO BAYANO.

“El Estado de Panamá violó los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1.1 y 2 de la Convención, debido a la falta de provisión de un procedimiento adecuado y efectivo para acceder a la propiedad del territorio ancestral y para su protección frente a terceros, en perjuicio de los pueblos Kuna de Madugandi y Emberá del Bayano y sus miembros.”

Las presuntas víctimas señalan como argumento a esta solicitud.

“ El incumplimiento de prevención frente a la invasión de colonos y la tala ilegal de madera, como corolario de su protección efectiva del territorio y los recursos naturales de las presuntas víctimas.”

Nos oponemos a la presente declaración solicitada por las presuntas víctimas por no ser cierta, ya que el ESTADO DE PANAMA, ha provisto “procedimientos adecuados y efectivos para acceder a la propiedad del territorio ancestral y para su protección frente a terceros.”

NOS OPONEMOS A LA CUARTA DECLARACIÓN SOLICITADA POR NO SER CIERTA, CON FUNDAMENTO EN LAS SIGUIENTES RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO:

PRIMERO: EL ESTADO DE PANAMA, ha provisto mecanismos adecuados y efectivos para acceder a la propiedad del territorio

ancestral, es así como mediante nuestra Carta Magna, la Constitución Política, desde los inicios de la República reconoce los territorios indígenas y ha garantizado por ley las regiones comarcales y reservas indígenas, así como también en una extensión de protección a los indígenas migrantes de sus tierras originarias, se han establecido por instrumento legal el acceso a solicitar Propiedad Colectiva, de todos aquellos grupos indígenas que estuvieren fuera de la Comarca.

SEGUNDO: EL ESTADO ha dispuesto a nivel normativo, administrativo y legal todo un sistema de protección a los derechos territoriales, ambientales y ecológicos de la República de Panamá, porque desde ya, es necesario determinar que la Biodiversidad del **ESTADO DE PANAMA**, es propiedad y es de beneficio de todos los panameños, por ende, no se podrá de manera alguna considerar, que los daños a las reservas forestales y/o indígenas, es en perjuicio solo de los pueblos originarios, la afectación es global, incluso compete por disposiciones legales locales e internacionales, al **PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD**.

EL ESTADO DE PANAMÁ, de manera histórica ha dispuesto normas administrativas y judiciales de naturaleza civil y penal, para la protección del derecho a la propiedad en beneficio de todos los ciudadanos panameños.

TERCERO: Las presuntas víctimas aducen como causal de violación de sus derechos Humanos que: “ **El Estado no ha generado un**

procedimiento especial para hacerle frente a estas demandas.”, en referencia a la invasión de tierras y de la destrucción de los recursos naturales.

La Constitución Política de la República de Panamá, en referencia a las Garantías fundamentales de los ciudadanos establece:

“Artículo 17.- Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y **bienes** a los nacionales donde quiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.

Artículo 18.- Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de al Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas.

Artículo 19.- **No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.”**

La garantía de protección de los derechos del ciudadano, los establece el Estado por conducto de las disposiciones Administrativas y Legales que son de acceso a todos los ciudadanos por igual, con la prohibición expresa de constituir fueros o privilegios personales o discriminatorios por razón de **raza**, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

Establecer una jurisdicción especial para investigar, perseguir, juzgar, sancionar, a los ciudadanos panameños, colonos o inmigrantes de sus tierras originales, en referencia a las posibles afectaciones de las áreas indígenas, sería violentar la Constitución, pues existen mecanismos

judiciales y administrativos suficientes a disposición de todos los ciudadanos para hacer ejercer y garantizar sus derechos de propiedad.

CUARTO: El Código Penal Panameño establece claras disposiciones para la defensa de la propiedad individual o colectiva, así podemos mencionar las siguientes disposiciones:

Artículo 228. Quien, para apropiarse en todo o en parte de un bien inmueble que pertenece a otro o para sacar provecho de él, remueva o altere las marcas o señales que determinan sus linderos será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Artículo 229. Quien, mediante violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza o clandestinidad, despoje total o parcialmente a otro de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio del derecho de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

En referencia a la destrucción de los recursos naturales , el Código Penal vigente norma en el Título XIII, los Delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial, que al referirse a los Recursos Naturales señala:

Artículo 399. Quien infringiendo las normas de protección del ambiente establecidas destruya, extraiga, contamine o degrade los recursos naturales será sancionado con prisión de tres a seis años.

La pena prevista en este artículo se aumentará de una tercera parte a la mitad en cualesquiera de los siguientes casos:

4. Cuando la acción recaiga en áreas protegidas o se destruyan total o parcialmente ecosistemas costeros marinos o humedales.
5. Cuando se cause daño directo a las cuencas hidrográficas.

6. Cuando se dañe un área declarada de especial valor biológico, histórico, arqueológico o científico.
7. Cuando se afecten ostensiblemente los recursos hídricos superficiales o subterráneos de manera que incida negativamente en el ecosistema.
8. Cuando se ponga en peligro la salud o la vida de las personas.
9. Cuando se use explosivo o sustancia tóxica para realizar la actividad pesquera.
10. Cuando la conducta sea realizada por una industria o actividad que funcione sin haber obtenido la respectiva autorización o aprobación de la autoridad competente.
11. Cuando en la conducta haya mediado falsedad o se haya ocultado información sobre el impacto ambiental de la actividad, o se haya obstaculizado la inspección ordenada por autoridad competente.
12. Cuando el daño sea irreversible. Son irreversibles los efectos que supongan la imposibilidad de retomar a la situación anterior.

El ESTADO DE PANAMA, en su afán de dar respuesta a todas las inquietudes de los ocupantes de áreas protegidas y de otorgar los instrumentos legales de protección adecuados, ha tipificado las siguientes conductas, de conformidad al Código Penal:

Artículo 403. Quien venda o traspase a cualquier título permiso de subsistencia doméstica sin autorización legal será sancionado con cincuenta a cien días-multa.

La pena será de uno a tres años de prisión cuando se trate de un permiso de explotación comunitaria.

Artículo 404. Quien compre o adquiera del beneficiario un

permiso doméstico o de subsistencia para la tala de árboles que no le corresponda será sancionado con prisión de uno a tres años.

La pena será de tres a cinco años de prisión cuando se trate de un permiso **de explotación comunitaria**.

Artículo 405. Quien debidamente autorizado para talar árboles se exceda de la cantidad, la especie o el área concedida será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Artículo 406. Quien sin autorización de la autoridad competente o incumpliendo la normativa existente tale, destruya o degrade formaciones vegetales arbóreas o arbustivas constitutivas de bosque o sujetas a protección especial, en áreas protegidas, en cuencas hidrográficas, en zonas prohibidas o restringidas, o cuando estas protejan vertientes que provean de agua potable a la población será sancionado con pena de tres a siete años de prisión.

Artículo 407. Quien incendie masas vegetales será sancionado con uno a tres años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.....

Se aumentará la pena de una cuarta parte a la mitad, en cualesquiera de los siguientes casos:

1. Cuando se produzca pérdida de la fertilidad del suelo o desecación del suelo.
2. Cuando se afecte una superficie mayor de cinco hectáreas.
3. Cuando se dañe significativamente la calidad de la vida vegetal.
4. Cuando se actúe para obtener beneficio económico.
5. Cuando se trate de áreas protegidas o de cuencas hidrográficas. No constituye delito la quema controlada y autorizada por la autoridad competente.

Artículo 408. Quien en contravención a las disposiciones legales aplicables y rebasando los límites fijados en las normas técnicas genere emisiones de ruido, vibraciones, gases, olores, energía

térmica, lumínica o de cualquier otra naturaleza que ocasionen graves daños a la salud pública, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión.

Artículo 409. Quien pesque, cace, mate, capture o extraiga recurso o especie de la vida silvestre, acuática o terrestre protegida o en peligro de extinción, sin contar con los permisos correspondientes para tales efectos, o quien teniendo los referidos permisos incumpla las especificaciones incluidas en estos, relacionados con la cantidad, la edad, las dimensiones o las medidas, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad: Si se realiza en un área protegida. Si utiliza instrumento o medio no autorizado o prohibido por las normas vigentes. Si se realiza fuera de las áreas destinadas para tales efectos. Si se efectúa durante el período de veda o temporada establecido para proteger las especies descritas en este artículo y su reproducción. Si se da en grandes proporciones.

Artículo 410. Quien sin autorización o permiso de la autoridad competente trafique, comercialice, negocie, exporte, importe, reimporte o reexporte espécimen de la vida silvestre, especie endémica, vulnerable, amenazada o en extinción o cualquier recurso genético será sancionado con prisión de tres a cinco años.

Será disminuida la pena en una tercera parte a la mitad si el espécimen de la vida silvestre o la especie endémica, vulnerable, amenazada o en peligro de extinción es restituido a su hábitat sin daño alguno, antes de que concluya la fase de iniciación e investigación.

Todas estas disposiciones, dan cuenta cierta de la existencia de los instrumentos normativos de protección de la propiedad y del medio ambiente a favor de todos los ciudadanos de la República de Panamá, todas normas de

carácter público y por ende perseguibles de oficio.

Es así como nuestro Código Procesal Penal (Ley 63 de 28 de agosto de 2008) de manera expresa establece en su Capítulo II, en su sección Primera, la Condición de Víctima y a renglón seguido: Define y especifica los Derechos de las Víctimas.

QUINTO: EL ESTADO DE PANAMA, en asistencia de los derechos de propiedad de todos los ciudadanos, ha elevado a delito, la conducta por la cual un funcionario o servidor público , venda, done, conceda o de cualquier otro modo adjudique tenencia o posesión sobre todo o parte de un bien inmueble de dominio público, promoviendo como delito agravado si se trata de un área protegida así se preceptúa:

“Artículo 416. El servidor público que venda, done, conceda o de cualquier otro modo adjudique tenencia o posesión sobre todo o parte de un bien inmueble de dominio público o que sea parte de un área protegida será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión.”

Esta norma es conocida por los Representantes de las presuntas víctimas, ya que en el mes de septiembre del presente año, el licenciado **HECTOR HUERTAS**, apoderado de las presuntas Víctima, ha ejercido la acción penal de esta norma en defensa de los intereses de las propiedades colectivas, tal como se hace constar en noticia reciente consultable por medios electrónicos:

Denuncia contra director de Anati por caso de tierras

28 | 09 | 2013

Una denuncia por abuso de autoridad y violaciones a las normas internacionales de los derechos humanos fue interpuesta por un

grupo de indígenas de la etnia Emberá.

Antonio Pérez M. [REDACTED] / PANAMA AMERICA

Una denuncia por abuso de autoridad y violaciones a las normas internacionales de los derechos humanos fue interpuesta por un grupo de indígenas de la etnia Emberá en contra del director de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), Franklin Oduber.

Héctor Huertas, abogado que representa al grupo indígena, detalló que la denuncia se origina tras el otorgamiento de tierras colectivas cercanas al río Bayano que le pertenecen a la comunidad de Pigati, ubicada en la comarca Emberá-Wounaan.

Detalló Huertas que el administrador de la Anati otorgó 96 hectáreas de terreno a una tercera persona, por lo que ha solicitado a la procuradora Ana Belfon que investigue el hecho.

Esta es la segunda denuncia que presentan moradores de esta comunidad contra el administrador de la Anati.

La anterior se encuentra en el Juzgado Segundo de Circuito Penal y solo vinculó a funcionarios subalternos de Oduber, por considerar que no se llegó a titular las tierras.⁵⁴

Es de necesaria consideración, por parte de la COMISION y de la **CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS**, que la sola solicitud o requerimiento de Justicia, por sí sola, no supone el necesario reconocimiento de los derechos reclamados, hay que surtir un proceso, hay que presentar pruebas, hay que desarrollar un procedimiento, que requiere el contradictorio por parte del imputado, la formulación de cargos por parte de la Vindicta Pública , el derecho a la defensa y el ejercicio de las garantías procesales vigentes, en todo Estado de Derecho.

⁵⁴ <http://www.panamaamerica.com.pa/notas/1648831-denuncia-contra-director-anati-caso-tierras->

La sola enunciación de un requerido derecho, no basta por sí solo para dar por cierto una violación a la ley o una infracción a los derechos humanos, es necesario la prueba de los hechos imputados.

SEXTO: EL ESTADO DE PANAMA promulgó la Ley 72 de 23 de diciembre de 2008: **“QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA PROPIEDAD COLECTIVA DE TIERRAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS QUE NO ESTÁN DENTRO DE LAS COMARCAS”**.

En su primer artículo esta ley señala:

Artículo 1. Esta Ley tiene como objetivo establecer el procedimiento especial para la adjudicación gratuita de la propiedad colectiva de tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos y comunidades indígenas, en cumplimiento del artículo 127 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, los siguientes términos se entenderán así:

Pueblos indígenas. Colectividades humanas que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenecía el país desde la época de la conquista o de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, lingüísticas y políticas.

Ocupación tradicional. Tenencia, uso, conservación, manejo, posesión y usufructo de las tierras de los pueblos indígenas definidos en este artículo, transmitidas de generación en generación.

Artículo 3. El título de propiedad colectiva de tierras garantiza el bienestar económico, social y cultural de las personas que habitan la

comunidad indígena. Para lograr estos fines, las autoridades tradicionales mantendrán una estrecha colaboración con las autoridades municipales, provinciales y nacionales.

Artículo 4. El Estado, a través de la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio del Desarrollo Agropecuario, reconocerá las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas y les adjudicará el título de propiedad colectiva, según el procedimiento establecido en la presente Ley.

Los requisitos para acceder a un título colectivo son sencillos y solo requieren de la gestión de los interesados y existe la obligatoriedad de las oficinas responsables, con términos en dar respuestas a sus solicitudes así observamos que esta ley dispone:

Artículo 6. La solicitud del título colectivo debe estar acompañada de los siguientes documentos:

- 1-El plano o croquis del área que es objeto de la solicitud.
- 2-La certificación de la Contraloría General de la República del censo poblacional de la comunidad.
- 3- La certificación de la Dirección Nacional de Política Indígena del Ministerio de Gobierno y Justicia de la existencia de la comunidad o comunidades solicitantes, fundamentada en informes y estudios previos. Las respectivas instituciones del Estado expedirán los documentos señalados en un término no mayor de treinta días y de forma gratuita.

Artículo 7. La Dirección Nacional de Reforma Agraria admitirá de inmediato la solicitud que cumpla con lo establecido en el artículo anterior, ordenará la inspección in situ previa notificación a los solicitantes y surtirá los trámites necesarios para el reconocimiento de la propiedad colectiva prevista en la presente Ley.

Artículo 8. La Dirección Nacional de Reforma Agraria resolverá los

casos de oposición a la solicitud de adjudicación de título de propiedad colectiva de tierras. En estos casos, la Dirección Nacional de Reforma Agraria agotará previamente una audiencia conciliatoria a fin de llegar a un acuerdo amistoso. En caso de subsistir la oposición a la solicitud de título de propiedad colectiva de las tierras, resolverá lo que en Derecho corresponda. La resolución que se dicte admite recurso de reconsideración y de apelación ante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el cual agota la vía gubernativa.

Artículo 9. Cumplido el trámite correspondiente, la Dirección Nacional de Reforma Agraria emitirá el título de propiedad colectiva de tierras a favor de la comunidad indígena, el cual es imprescriptible, intransferible, inembargable e inalienable.

SEPTIMO: En el marco administrativo tenemos la Ley 59 de 8 de octubre de 2010 “ Que crea la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, Unifica las competencias de la Dirección General de Catastro, la Dirección Nacional de Reforma Agraria, el Programa Nacional de Administración de Tierras y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia”.

Esta norma, es fundamental en los derechos de accesibilidad a los ciudadanos panameños a la propiedad de las tierras que ocupan y trabajan, ya que dicha Institución unifica todas las autoridades que dicen relación al otorgamiento de títulos de propiedad ya sea privados o colectivos y además dicen relación al ordenamiento territorial y demarcación geográfica del territorio nacional, constituyéndose la ANATI en una unidad administrativa autónoma deliberante en torno al otorgamiento, protección y delimitación de las propiedades individuales y colectivas.

Así dispone el Artículo Primero de esta Ley:

“Se crea la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, identificada con las siglas ANATI , en lo sucesivo la Autoridad, como única entidad competente del Estado para regular y asegurar el cumplimiento y aplicación de las políticas, leyes, reglamentos en materia de tierras y demás bienes inmuebles, independientemente de que sean de propiedad privada o propiedad estatal, nacional o municipal, bienes de uso o de dominio público, **así como de las tierras indígenas o colectivas**, y para recomendar la adopción de políticas nacionales relativas a estas materias o bienes.”

Esta disposición , además introduce en beneficio de todos los reclamantes de derechos de tierras, una serie de mecanismos innovadores y de fácil acceso como lo es la Conciliación, mediación y demás métodos alternos de resolución de conflictos. Para estos efectos se creó, el Departamento de MEDIACION Y CONCILIACION adscrito a la Dirección Nacional de Políticas Legales y Asesoría Jurídica de la Autoridad. Esta norma desarrolla cada uno de los procedimientos alternativos, los cuales como podrá observarse al tenor de la ley son de fácil acceso al solicitante, al decir de la norma “ Las sesiones de conciliación no tienen requisitos procesales obligatorios.”

OCTAVO: EL ESTADO DE PANAMA, en ese permanente deseo de dar reconocimiento a la propiedad indígena, promulgó el Decreto Ejecutivo 223 de 29 de junio de 2010, que reglamenta la ley 72 de 2008, en el cual se desarrolla el procedimiento de ejecución de otorgamiento de los títulos colectivos, se inserta un proceso de publicidad de la solicitud para surtir oposiciones, mecanismos de verificación de tierras solicitadas, medidas, inspecciones in situ, verificación si son tierras protegidas, serán previamente coordinadas sus adjudicaciones con la AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE, se establece el proceso administrativo, para la oposición al

otorgamiento de los títulos, así como también se señalan los recursos administrativos que poseen los solicitantes u oponentes para agotar la vía gubernativa, teniendo la posibilidad de solicitar reconsideración ante la misma autoridad que emitió la resolución y apelación ante el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

De conformidad a la nueva disposición , que crea la AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS, o sea la Ley 59 de octubre de 2010, solo ocupa el recurso de reconsideración ante la misma autoridad.

NOVENO: En referencia a la protección del medio Ambiente y cuidado de las reservas forestales y comarcas, la AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE (ANAM) en sus memorias publicadas electrónicamente, señalan precisamente para las áreas de Panamá Este durante el año 2011 a 2012 lo cual significa la ocurrencia de 26 violaciones en el área del Bayano, no obstante para la Comarca Kuna Ayala, se señala la inexistencia de reclamos a nivel de afectación de la naturaleza..

**Cuadro 17-1. DENUNCIAS CIUDADANAS
REGISTRADAS EN ANAM, SEGÚN REGIONAL: AÑOS
2011-2012**

Año – regionales

2011	704
2012	547

Denuncias ambientales Recibidas

Bocas del Toro	34
Coclé	55
Colón	52
Chiriquí	104
Darién	51
Herrera	12
Los Santos	–
Panamá Este	26
Panamá Metro	82
Panamá Oeste	72
Veraguas	47
Comarca Kuna Yala	–
Comarca Ngäbe Buglé	12

(...) Información no disponible. (-) Información nula o cero.

Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente. Oficina de Asesoría Legal. Sección de Denuncia Ambiental, 2011-2012.⁵⁵

⁵⁵http://www.anam.gob.pa/images/stories/documentos_sistema/Compendio_Anual_2012/Programa17/Cuadro_17-1.pdf

CONTESTACION A LA QUINTA DECLARACION SOLICITADA POR LA REPRESENTACIÓN DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS DE LAS COMUNIDADES KUNA DE MADUGANDI Y EMBERAS DE ALTO BAYANO.

“El Estado de Panamá violó el artículo 24 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la Convención, por el incumplimiento de su obligación de garantizar y respetar los derechos sin discriminación por origen étnico y de brindar protección igualitaria ante la ley, en perjuicio de los pueblos INDÍGENAS KUNA DE MADUGANDI Y EMBERÁ DEL BAYANO Y SUS MIEMBROS.

Las presuntas víctimas señalan como argumento a esta solicitud.

“La presencia de discriminación y la falta de igualdad ante la ley. Sobre todo por la vigencia de normas internas de carácter asimilacionista que genera violación a la propiedad colectiva de tierras ancestrales y los recursos naturales de los Pueblos Indígenas de Panamá .

EL ESTADO DE PANAMA se opone a las solicitudes de declaraciones de las presuntas victimas de la comunidades **KUNA-MADUGANDI Y EMBERÁ DE ALTO BAYANO**, en consideración a los siguientes argumentos de hecho y de derecho.

PRIMERO: El proceso de investigación desarrollado por la COMISION INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS, demuestra de manera incuestionable e inalterable, el interés del ESTADO DE PANAMA,

por dotar a las comunidades indígenas de su propiedad colectiva o comarcal. ,

Es necesario observar que el ESTADO ha provisto los instrumentos jurídicos para la creación de COMARCAS Y RESERVAS y posteriormente en atención a las “comunidades secundarias”, designando así a aquellos segmentos de población migrantes, que han salido de reservas y comarcas asentándose en nuevos territorios y a los cuales se les ha dado pleno reconocimiento a sus nuevos asentamientos, promoviendo Leyes, Decretos, autoridades administrativas, oficinas especiales, todos para dar debida protección a la propiedad colectiva a los indígenas que habitan estos nuevos territorios.

Es evidente también, que a pesar de que los colonos y negros originarios de las tierras del Bayano y otras etnias que ocupan dicha zona, no han tenido la consideración jurídica especialísima que se le ha dispensado a los Pueblos Indígenas en atención y respeto a su cultura ancestral, a su especial condición de promotores ecológicos por excelencia, al hecho de que son Panameños, podemos colegir de manera inequívoca que no existe discriminación, ni falta de igualdad ante la ley, para con los pueblos indígenas.

SEGUNDO: La creación de un VICEMINISTERIO DE ASUNTOS INDIGENAS, (aprobado mediante Ley 64 de 20 de Septiembre de 2013, debidamente promulgado mediante Gaceta Oficial 27378)⁵⁶ adscrito al MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, es prueba clara, fehaciente, indubitable del especial tratamiento que dispensa el ESTADO DE PANAMA

⁵⁶ Gaceta Oficial 27378 publicada el 20-9-2013 por el cual se crea el VICE MINISTERIO DE ASUNTOS INDIGENAS.

a las comunidades Indígenas. El multi concierto racial panameño, algún día reclamará iguales tratamientos con los mismos argumentos que hoy se pretendan hacer valer, no obstante las otras etnias no indígenas, tal vez si tengan la razón, en reclamar no haber sido dispensado con la atención que se ha prestado a los grupos indígenas, ya que los otros grupos que cohabitan estas áreas geográficas, tienen los mismos problemas de reconocimiento de tierras, son ciudadanos, tienen igual acceso a la Justicia y deben como en efecto lo procura EL ESTADO DE PANAMA, que tengan igual oportunidad ante la Ley y la Justicia.

TERCERO: Se ha pretendido considerar que no hay igualdad de trato o discriminación en observancia a la falta de atención adecuada por partes de las autoridades de salud, no obstante se falta a la verdad, pues igual acceso tienen los indígenas, los colonos, negros, extranjeros que habitan dicha zona, a los centros de salud del área sin que exista discriminación de ninguna naturaleza en el acceso a la salud.

Así vemos que el Ministerio de Salud de Panamá cuenta con Tres centros especiales de atención en el Área del Bayano a saber:

- a- POLICENTRO DE SALUD DE CHEPO
- b- CENTRO DE SALUD DE AKUA YALA
- c- POLICLINICA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL CAÑITA.

Además se han establecido de manera histórica los siguientes Centros de Salud:

- a- CENTRO DE SALUD DE TORTI
- b- PUESTO DE SALUD IPETI GUNA
- c- PUESTO DE SALUD IPETI EMBERA
- d- PUESTO DE SALUD PIRIATI EMBERA.

Todos estos centros de salud, están a disposición de todos los ciudadanos del Área de Bayano y se podrá apreciar los distintos centros de salud específicamente, asentados en las comunidades y propiedades colectivas indígenas.

La creación de La Dirección de Asuntos Sanitarios Indígenas, adscrita al Ministerio de Salud, la cual se crea mediante Resolución No 706 de 22 de Julio de 2011 y publicada en la Gaceta Oficial con el No 26863-B el día viernes 2 de septiembre de 2011, demuestra el interés del ESTADO DE PANAMA de garantizar a la comunidad indígena, acceso a la salud. Las iniciativas desarrolladas por esta Dirección⁵⁷, garantizan una nueva etapa en el desarrollo de los programas de salud de las áreas indígenas a nivel nacional.

La reciente construcción del MINSA CAPSI de TORTI, por el MINISTERIO DE SALUD de la República, es el corolario de los esfuerzos del ESTADO para llevar la salud a los pueblos indígenas y al resto de los ciudadanos del ALTO BAYANO.

⁵⁷ http://www.minsa.gob.pa/sites/default/files/publicaciones/memoria_2011v5.pdf

CUARTO: El acceso a la oportunidad del trabajo, de obtener la subsistencia, ha sido también de amplio reconocimiento por parte del ESTADO DE PANAMA para garantizar sin distingo de raza o credo, las mismas oportunidades que el resto de los asociados panameños.

Así queremos observar y llamar la atención de la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y de la COMISION, que lo que en este proceso se deduce, los supuestos daños y afectaciones causadas por la construcción del embalse de la Hidroeléctrica del Bayano, no se ha señalado en ninguna parte del proceso, los beneficios y las virtudes de este proyecto para las comunidades indígenas.

Es necesario señalar, que como un proceso de protección y sostenibilidad del embalse del Bayano y por razón de proyectos Estatales y Multinacionales, el Lago Bayano, además de energía limpia ha dotado a los pueblos indígenas de una fuente de recursos financieros renovables, como lo es la cría de Tilapia, que supone un rubro económico importante, de exportación, para las comunidades indígenas.

El Plan de Manejo del Lago Bayano, supone un esfuerzo Estatal conjuntamente apoyado por el SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA) y otros proyectos financiados por JAPON quienes han permitido el desarrollo de esta actividad comercial en beneficio de los pueblos indígenas KUNA DE MADUGANDI Y EMBERA WOUNAN.

En el informe presentado, en el año 2007 por la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) sobre el **Plan de Manejo del Lago Bayano con énfasis en la Pesca y la Acuicultura, la Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA), Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), TAIWAN, comentaban:**

“Este embalse de 350 kilómetros cuadrados, fue construido en 1976 por el represamiento del río Bayano para la generación de energía eléctrica. La caracterización demostró que en el mismo, la pesquería de tilapia es una actividad económica importante de la cual subsisten más de 1,000 pescadores que habitan en 16 comunidades esparcidas en las orillas del embalse; los cuales producen aproximadamente 3.9 millones de kilos al año, que en volumen comercializado a los Estados Unidos de América representan cerca de 2 millones de dólares.

Las características físicas, biológicas y ambientales del agua hasta una profundidad de 18 metros, permiten un desarrollo normal de las especies acuáticas, las pesquerías y acuicultura en el embalse, siendo están influenciadas por las condiciones climáticas, tanto en la época seca como en la lluviosa.

La mayoría de los pescadores (60.58%) ejerce la actividad desde hace cinco (5) años; utilizando el 94% de ellos botes para la captura de la tilapia, cien el 86.45% de las 155 embarcaciones reportadas de propiedad privada. El arte de pesca dominante es el “trasmallo chino” y el volumen diario de pesca es de 139.1 kg por pescador por día; lo que genera un ingreso promedio diario por pescador de US\$ 47.01, cifra superior a los US\$ 7.71, que es el salario mínimo pagado en otras actividades agropecuarias en el área. En lo referente a la actividad pesquera, la caracterización mostró que en la actualidad la pesca de la tilapia en este embalse ha representado una producción de 3.9 millones de kilogramos (3,900 toneladas), que en volumen comercializado a los Estados Unidos representan un valor cercano a los 2 millones de dólares. Dicha actividad la realizan aproximadamente 1,200 pescadores de 16 comunidades localizadas a orillas del embalse, **integradas por dos etnias indígenas (Kuna y Emberá-Wounaan)**, así como por

colonos provenientes de las provincias centrales (Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas) y Chiriquí.⁵⁸ (El resaltado y subrayado es nuestro).

Empresas Indígenas seleccionadas	
COMARCA KUNA YALA	
Asociación de Productores Agrícolas de Ogob Birya	Venta de coco
Asociación de mujeres productoras de mola de Galu Dugbis	Producción y venta de molas
COMARCA EMBERÁ WOUNAAN	
Asociación Agro Comercial e Industrial Arriera (TRA)	Producción, compra y venta de plátano. Venta de mercancía al por menor.
Empresa de Turismo Sostenible	Elaboración y venta de artesanías. Venta de servicios etno-turísticos
Empresa Forestal Protuqueza	Comercialización de madera, plátano y cultivos para artesanías.
COMARCA MADUGANDI	
Asociación de pescadores de tilapia, Madugandí.	Pesca y venta de tilapia.
COMARCA WARGANDI	
Cooperativa de Servicios Múltiples Productores de Café de Wala, R.L.	Producción y comercialización de café orgánico

⁵⁸ <http://www.slideshare.net/maicol1383/plan-de-manejo-bayano>. **Plan de Manejo del Lago Bayano con énfasis en la Pesca y la Acuicultura**

OTRAS EMPRESAS IDENTIFICADAS POSTERIORMENTE AL DISEÑO DEL PROGRAMA	
COMARCA EMBERÁ WOUNAAN	
Ne Drua	Desarrollo económico de la comarca Emberá Wounan (clúster forestal)
Emberá Drua	Turismo etno-ecológico en el lago Gatún.

En ese mismo orden de ideas y en el ánimo ESTATAL de fortalecer las comunidades indígenas en su nivel socio económico, de oportunidades laborales y por ende el crecimiento integral del grupo social, se crea **(PRODEI) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL INDIGENA (BID)** programa aprobado por las comunidades indígenas desde el 6 de noviembre del año 2007 y que ha beneficiado a número plural de organizaciones indígenas, constituidas en empresas, así podemos mencionar:⁵⁹

En protección de estos recursos naturales renovables, en beneficio de las economías de los pueblos indígenas, normativamente se protegió esta actividad mediante la Resolución ADM/ARAP N0.140 de 11 de diciembre de 2009, “Por medio de la cual se establecen medidas para la pesca y acuicultura en el Lago Bayano.”⁶⁰

⁵⁹ MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS PANAMA
file:///Volumes/ADATA%20UFD/PESCA%20TILAPIA%20BAYANO/¿Qué%20es%20P
RODEI%3F.webarchive

⁶⁰ http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26429_A/24410.pdf

QUINTA: A la solicitud de los peticionarios, en referencia a “la vigencia de normas internas de carácter asimilacionista, que genera violación a la propiedad colectiva de tierras ancestrales y los recursos naturales de los Pueblos Indígenas de Panamá”, tendremos que darle respuesta a estas consideraciones en dos partes, en primer término no especifican las presuntas víctimas cuales son las normas internas de carácter asimilacionista, que afectan sus territorios ancestrales, ya que hemos descrito en el decurso de esta contestación de cargos, todo el aparato jurídico garantista de los derechos, reconocimiento y defensa de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas.

Hemos señalado que la prueba incorporada por los Petentes referida a la Resolución Numero ADMG-001 de 2012 emitida por la Autoridad de Nacional de Administración de Tierras, sólo suspende los tramites de títulos privados y no los trámites de títulos colectivos de propiedad, con lo cual sólo podrían considerarse afectados, los colonos que hubiesen hecho solicitud de adjudicación de tierras sobre áreas cercanas o en traslape con las áreas solicitadas por los pueblos indígenas. Pero no podrá considerarse conductas asimilacionistas, integracionistas o mecanismos de absorción o imposición cultural, racial, o de cualquier otra índole, cuando la solicitud de suspensión de esos títulos privados fue elevada a consideración de la autoridad y admitida tal solicitud a solicitud de los pueblos indígenas, como lo señala y lo define la misma resolución, para garantizar sus derechos, quedando los solicitantes de predios privados, imposibilitados de continuar con sus trámites, lo que fortalece los argumentos del ESTADO de no considerar ciertas las afirmaciones de los peticionarios.

En certificación aparte, aportada por los Peticionarios Indígenas, en efecto, se reitera que la norma antes descrita afecta solo a los títulos privados y no a los títulos colectivos. Así señala la referida certificación:

“Que el proceso de Titulación Colectiva, en el área de Alto Bayano, Piriati Emberá , Ipeti Emberá, Maje Emberá Drua (Maje Cordillera y Unión Emberá) se encuentran en revisión para continuar con el debido tramite respectivo a la adjudicación.”⁶¹

Por otro lado, en esa misma solicitud, cuando al referirse a este argumento se señala o hacen referencia a “ los Recursos naturales de los Pueblos Indígenas de Panamá,” queremos observar que los recursos naturales de los pueblos pertenecen a todos los ciudadanos que habiten en el país, la propiedad privada y colectiva debe ser respetada y salvaguardada y aquel espacio vital que supone la conservación de la vida humana, mediante la protección de los recursos naturales, no es de obligación de un grupo étnico, es obligación de todos los ciudadanos del país y del mundo y de igual manera la propiedad de esos recursos son del conglomerado social panameño y no de propiedad exclusiva de un grupo, incluso podemos afirmar que los entornos ecológicos pertenecen al mundo.

⁶¹ Prueba extemporánea presentada en el escrito de Solicitudes, argumentos y pruebas en relación al caso 12.354 PUEBLOS INDIGENAS KUNA DE MADUGANDI y EMBERA DE BAYANO.

SEXTO: La cosmovisión del entorno indígena, debe ser visto en la misma dimensión que la cosmovisión de todos los grupos étnicos, que habitan la República de Panamá y en especial , de los pueblos que habitan las regiones objeto de estas solicitudes y peticiones.

Los grupos vulnerables, son aquellos que por diversas circunstancias, no pueden acceder al ejercicio de sus más primarios derechos, no acceden al respeto a su integridad como seres humanos y su indefensión podría promover injusticia y violación de derechos humanos, y es en esta situación que EL ESTADO tiene que velar porque se superen todos y cada uno de los obstáculos que impidan, la plena vigencia de esos derechos. El reconocimiento de la Propiedad privada, el acceso a la salud, a la educación, a la accesibilidad de los mercados, a la Justicia es por igual a todos los habitantes del territorio nacional.

La integración de los grupos indígenas a la cosmovisión del país, no es asimilacionista, somos un solo pueblo, una sola República, la convivencia de las distintas etnias, dentro del marco del respeto a la ley, la Justicia y los derechos humanos de todos, es el objetivo primario del ESTADO. Los grupos vulnerables, requieren de asistencia, con respeto absoluto de su cultura, pero es necesario sin violentar su integridad cultural, cambiar sus prácticas de disposición de desechos orgánicos, educarles en la utilización de aguas tratadas, cloradas o hervidas, promover campañas de vacunación, educar la forma de equilibrar los componentes alimentarios que garanticen una dieta equilibrada, promover la tolerancia en las diversidad de las etnias y garantizar

su coexistencia en un marco de respeto mutuo. El modo de vida tradicional, debe ser conservado, pero es orgullo del ESTADO, visitar las comarcas y ver acceder al pueblo indígena al ciber espacio (redes de información) , abriendo horizontes, ampliando sus conocimientos, abriendo su cosmovisión a los adelantos del mundo, sin controvertir con sus creencias, su cultura, su estructura social, sin afectar su modo de vida tradicional, su sistema económico. Pero no podremos dejar de promover que el Indígena Panameño, pueda acceder con su trabajo al Turismo internacional, a la exportación de sus productos de artesanías y pesca, presumimos que cuando la ilustre COMISION y los PETICIONARIOS, se refieren a estos aspectos, tienen que coincidir con el criterio del ESTADO, que la educación, el desarrollo, el progreso individual y social, necesariamente promoverá adecuaciones a la cosmovisión y las referencias de su entorno, no serán violentadas jamás, pero necesariamente debe existir una adecuación que promueva ese equilibrio, entre proteger su cultura invaluable y promover su desarrollo social, de salud, de educación, de accesos a la producción, a la Justicia, en fin estar preparados para los retos del futuro y sobre todo ganarle a la pobreza, material y espiritual.

Por todas las consideraciones expuestas solicitamos a la **CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS** acoja nuestras EXCEPCIONES y en consecuencia Ordene el Archivo del presente expediente o en su defecto DECLARE que las solicitudes, argumentos y pruebas del ESCRITO DE SOLICITUD DE ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS en la **PETICION INTERPUESTA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS** en razón de **CASO NUMERO 12.354** propuesto por **LOS**

PUEBLOS INDIGENAS KUNA DE MADUGANDI y EMBERA DE BAYANO Y SUS MIEMBROS. PANAMA., petición presentada por la COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS el 11 de mayo del año 2000 Y SU INFORME APROBADO EN SESION N° 1924 celebrada el día 13 de noviembre de 2012 y que SE SOMETE A CONSIDERACION DE LA CORTE ,se concluya que las pretensiones no se adecuan a la realidad fáctica y probatoria presentada en este caso y se DECLARE que el ESTADO DE PANAMA no violó ninguna de las disposiciones de la CONVENCION AMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

PRUEBAS.

- 1- Copia de la Ley 18 de 8 de noviembre de 1934, por la cual se crea la RESERVA INDIGENA DE ALTO BAYANO.
- 2- Copia de la Carta remitida el 18 de septiembre de 1935 al Presidente de la República de Panamá HARMODIO ARIAS, por MANUEL FERNANDEZ SAGUILA DE KINTUPO, representante de los indígenas de Alto Bayano, agradeciendo la creación de la RESERVA INDIGENA DE ALTO BAYANO y copia de la respuesta emitida por el Presidente de la República.
- 3- Revista Lotería Nos. 350- 351, Mayo -Junio de 1985, que contiene a fojas 61-76, Resumen del Desarrollo del Programa de reubicación Chocoe en el Bayano, Traslado de Majecito.
- 4- Aducimos como prueba, ESCRITO DE SOLICITUD DE ARGUMENTOS Y PRUEBAS DE LAS PRESUNTAS VICTIMAS en la **PETICION INTERPUESTA ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS** en razón

de **CASO NUMERO 12.354** propuesto por **LOS PUEBLOS INDIGENAS KUNA DE MADUGANDI y EMBERA DE BAYANO Y SUS MIEMBROS. PANAMA.**, petición presentada ante la **COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS** el **11 de mayo del año 2000 Y SU INFORME APROBADO EN SESION N° 1924** celebrada el día **13 de noviembre de 2012** y que **SE SOMETE A CONSIDERACION DE LA CORTE . ANEXO 1.**

- 5- Invocamos como prueba **EVALUACION EXTERNA FINAL DEL PROGRAMA de DESARROLLO SOSTENIBLE DE DARIEN-PDSD. 2011., ANEXO 7** de la Contestación dada por el **ESTADO DE PANAMA** a las solicitudes, declaraciones solicitadas por la **COMISION** en su informe de Fondo **125/12.**
- 6- Invocamos como prueba , el **Anexo 6 del Informe de Fondo 125/12** que contiene **COMPONENTE DE INDEMNIZACION”** contenido en el **INFORME SOCIO ECONOMICO SOBRE LA INDEMNIZACION E INVERSION DE LA COMARCA KUNA DE MADUGANDI Y DE LAS TIERRAS COLECTIVAS EMBERA PIRIATI Y MAJE CORDILLERA.”**,
- 7- **Copia de Nota de fecha 26 de enero de 2011, ANATI/0163** por la cual el **Licenciado Alejandro m. Castillero ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ADMINISTRACION DE TIERRAS (ANATI)** acusa recibo de la solicitud, formulada por el **CACIQUE GENERAL DE ALTO BAYANO BOLIVAR JARIPIO**, para iniciar el tramite de solicitud de títulos de propiedad colectiva de la etnia **EMBERA.**

- 8- **Nota del CONGRESO GENERAL DE TIERRAS COLECTIVAS EMBERA DE ALTO BAYANO, QUE SOLICITA SE SUSPENDA TRAMITE DE OTORGAMIENTO DE PROPIEDAD PRIVADA, SOBRE TIERRAS DENTRO DE LA JURISDICCION DE LAS TIERRAS COLECTIVAS DE ALTO BAYANO.**
- 9- Copias de sendas notas cursadas entre el ADMINISTRADOR GENERAL DE AUTORIDAD NACIONAL DEL AMBIENTE, LA POLICIA TECNICA JUDICIAL, EL FISCAL UNDECIMO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA EL AMBIENTE, INFORME DE INSPECCION NUMERO 006-2007, que ilustra un típico caso de arriendo de tierras por parte de sectores indígenas a colonos.
- 10- Oficio Numero 3973 de 6 de septiembre de 2013, suscrito por la LICENCIADA JENISBETH MALEK VALDES, Fiscal Quinta del Circuito de Panamá, en la cual se informa de las Instrucciones sumariales existentes por razón de denuncias propuestas por las COMUNIDADES KUNA DE MADUGANDI y las COMUNIDADES EMBERA WOUNAAN, de las áreas de IPETI EMBERA, PIRIA, ICANDI PIRIATI y MAJE CORDILLERA y su estado de conocimiento al día de la referida nota.
- 11- Oficio Numero FSAI-13 de fecha 19 de septiembre de 2013, suscrito por la LICENCIADA GRETA MARCHOSKY DE TURNER, FISCAL SUPERIOR DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, en la cual se informa de las Instrucciones sumariales existentes por razón de denuncias

propuestas por las COMUNIDADES KUNA DE MADUGANDI y las COMUNIDADES EMBERA WOUNAAN, de las áreas de IPETI EMBERA, PIRIA, ICANDI PIRIATI y MAJE CORDILLERA y su estado de conocimiento al día de la referida nota, y en la cual se informa que es la Fiscalía Quinta del Circuito del Primer Circuito judicial de Panamá la Fiscalía Especializada para la atención de esta clase de investigaciones penales.

- 12- INFORME SOBRE LOS PROGRAMAS DE SALUD DE PANAMA ESTE. “ INFORME SOBRE LOS PROGRAMAS DE ATENCION Y SALUD EN LAS COMARCAS INDIGENAS GUNA DE MADUGANDI Y EMBERA WOUNAAN DE PANAMA ESTE (IPETI EMBERA, PIRIA, PIRIATI, ICANTI, MAJE CORDILLERA.
-